**INFORME CONJUNTO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS**

Respuestas al cuestionario elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Vía email: [adesouza@ohchr.org](mailto:adesouza@ohchr.org)

**INTEGRANTES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

P R E S E N T E S

Por medio de este escrito, nos dirigimos respetuosamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante ACNUDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), para exponer y dar contestación al cuestionario elaborado con motivo del *Informe Sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas 2019.*

Por ello, el Instituto Autónomo de Occidente (en adelante el Instituto) siendo una consultoría afín a las diversas expresiones de la sociedad civil organizada con sede en Guadalajara, Jalisco, México; buscamos e incentivamos la cultura de paz ante las problemáticas sociales de la región, a través de la asesoría integral, diferencial y especializada, así como la capacitación con enfoque transformador y monitoreo de la debida diligencia en la defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados. Razón por la cual, ponemos a su consideración la siguiente evaluación.

De acuerdo a los principios que otorga el derecho de autor, el Instituto transmite expresamente los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y alquiler de la presente obra a esta Honorable ACNUDH y la CIDH.

Por lo que con fundamento en el artículo I, II, III, IV, V, VII, IX y XI de la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas; así como, los arábigos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la Convención sobre Propiedad Literaria y Artística, suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional Americana y el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas; el Instituto le solicita amablemente el crédito y el reconocimiento de los derechos morales de autor y cuando proceda, el de los derechos patrimoniales de autor.

En consecuencia, autorizamos y consentimos expresamente a la ACNUDH y la CIDH que, en caso de ser publicada la presente aportación sistemática de los cuestionamientos efectuados, se haga con el nombre íntegro del Instituto Autónomo de Occidente contenido en el presente ocurso.

En consecuencia, y dentro del plazo establecido, el Instituto pone a manera de aporte a la Honorable ACNUDH y la CIDH los siguientes criterios que, consideramos aplicables a las cuestiones concretas planteadas a las pretensiones que tendrá que hacer a través del *Informe Sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas 2019.*

**I.** **ÍNDICE**

[1.- Introducción ……………………………………………………………………..……………….](#_Toc396514264)4

2.- Cuestionario elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [mayo de 2019]………13

3.-Bibliografía……………………………………….…..………………………………………......65

4.- Requisitos y cuestiones de procedimiento……………………………………………………... 68

**I. INTRODUCCIÓN**

Para comprender la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en la región, es importante realizar una reflexión exhaustiva de lo que constituye la defensa de los derechos humanos en diferentes escenarios y momentos de la historia. Asimismo, resulta valioso analizar cómo es concebida esta actividad desde las diferentes aristas que presenta el escenario de la lucha por los derechos humanos. Por lo anterior, este documento abordará tanto contexto sociales, políticos e históricos de la defensa de los derechos humanos en México.

Entendiendo en este sentido que las y los defensores de derechos humanos somos personas de diversas tipologías, tanto de manera individual, colectiva y dentro de los movimientos sociales, así como personas morales, grupos u organizaciones que actuamos pacíficamente, sin recurrir a la violencia, siendo además agentes promotores de la observancia, defensa y gobernanza de los derechos humanos a través de la incorporación de una cultura de paz, el libre acceso a la justicia y la verdad histórica de los hechos victimizantes.

Con el producto del cuestionario se pretende lograr visibilizar las situaciones de injusticia social e impunidad democrática en la región, identificando que uno de los principales contextos que limitan la labor de las y los defensores de los derechos humanos es la falta del reconocimiento legítimo y permisivo de la defensa de los derechos humanos como un derecho autónomo y justiciable en la normatividad doméstica.

Por ello, es de vital importancia comprender que los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades mínimas e indispensables para tutelar la dignidad humana que tenemos todas las personas por el simple hecho de serlo (presupuesto interno *ius naturalista*); reconocidos tanto en el espectro normativo universal, regional y nacional (presupuesto externo *ius positivista*), cuya realización efectiva le corresponde a los Estados. Por lo que, los seres humanos tenemos derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos, independientemente de nuestras diferencias o en el caso particular de nuestras actividades sociales y profesionales como eje transversal de todos los demás derechos.

No obstante lo anterior, y para verificar que efectivamente nos encontramos en presencia de un derecho humano, debemos de desmembrar las características esenciales y básicas que los conforman, los cuales son y se desprenden del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en las constituciones democráticas de diversos Estados naciones:

* Universalidad.- Los derechos humanos son para todas las personas en cualquier parte del mundo; por lo que implica que los derechos humanos nos corresponden a todas las personas sin excepción alguna, pues somos iguales en dignidad. Así el sistema reclama la protección de los derechos de todas las personas.
* Interdependencia.- Los derechos humanos interactúan y se relacionan con demás derechos; por lo que establece que el goce o ejercicio de un derecho depende de la realización de otros derechos, por ejemplo, no puede haber derecho a la salud sin derecho a la alimentación.
* Indivisibilidad.- Los derechos humanos no se pueden dividir de manera separada; por lo que consiste en que la concreción de los derechos sólo puede alcanzarse en la realización conjunta de todos los derechos, por lo tanto, requiere que todos los derechos humanos se vayan concretizando y haciendo efectivos.
* Progresividad.- Los derechos humanos avanzan al transcurso del tiempo y de conformidad a las nuevas necesidades sociales; por lo que refiere quehay una trascendencia y con base de este, un reconocimiento. No debe haber marcha atrás en la expansión de los derechos ni en los niveles de cumplimiento.

En consecuencia, los Estados tienen, por una parte, la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos y por otra, el deber de regular su conducta de conformidad con esos derechos, para que, con su plena realización puedan respetarse los principios fundamentales de los derechos humanos.

Ahora bien, respecto al reconocimiento sobre la defensa de los derechos humanos como un derecho humano autónomo nos fundaremos en la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale Risco Antonio[[1]](#footnote-1), en donde se desprenden los hechos (análisis sociológico), valores (análisis axiológico, moral y filosófico) y normatividad (análisis del derecho abstracto), correspondientes a dar una visión integral de las esferas históricas, culturales y dimensionales de la defensa de los derechos humanos. Lo anterior, soportando las aportaciones a evaluar de los reactivos exhortados por la Oficina del ACNUDH y la CIDH sobre el contexto histórico y real de las y los defensores de derechos humanos en México.

No omitimos en este andamiaje constructivo sobre el derecho a defender los derechos humanos, las reglas operativas e interpretativas de los tratados internacionales en donde descansan los derechos fundamentales, siendo en este caso:

1. **Interpretación evolutiva**

Friedrich Savigny menciona la adaptabilidad de los ordenamientos legales de acuerdo a la evolución de la sociedad[[2]](#footnote-2); lo cual muestra el surgimiento de nuevas necesidades que pudieran tener las y los defensores de derechos humanos en la observancia e incidencia de sus actividades.

1. **Interpretación sistemática (histórica)**

Encargada de perpetuar la norma como parte de un todo, cuyo significado y alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece[[3]](#footnote-3). Para este método, el sentido de la norma, no sólo está determinado por los términos en que se expresa, pues necesariamente debe atenderse a la relación que se da con otras normas, para llegar a una interpretación válida, dimensionando la esencia de los ordenamientos jurídicos. Por lo cual, delimita la proyección histórica en materia de derechos humanos que ha tenido nuestro país las y los defensores de derechos humanos.

1. **Interpretación teleológica**

Para este método de interpretación, se busca de manera preponderante la finalidad de la norma con la intención de establecer el sentido y alcance de la misma. Para descubrir la finalidad de la norma, resulta importante descubrir los objetivos que originaron la creación de la propia norma jurídica para el acceso efectivo a la justicia y verdad histórica que promueven la defensa de los derechos humanos.

1. **Interpretación en sentido literal**

Reflexionando que todos estos derechos emergentes hacia las defensa de los derechos humanos debieran de concentrar de manera armonizada a los presupuestos convencionales y constitucionales que nacen del núcleo vital de una sociedad[[4]](#footnote-4). Por lo cual, esta técnica lograra brindar la visión aspiracional sobre un nuevo modelo institucional de protección en materia de derechos humanos.

Robusteciendo lo anterior, y como primer estándar internacional en atención a este contexto la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, en el que no solo reconoce la legitimidad al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino también el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de garantizar su protección; dignificando esta labor el 29 de noviembre “Día Internacional de las Defensoras”, en donde la defensa de los derechos humanos constituye un derecho humano.

En virtud a lo anterior, se acredita el reconocimiento internacional de la labor de defensa de los derechos humanos[[5]](#footnote-5), que toda persona de manera individual o colectiva promueve y procura la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacionales e internacionales.[[6]](#footnote-6) Siendo esto un claro compromiso de reconocer, promover y proteger la labor y los derechos de los defensores de derechos humanos de todo el mundo.

Por ello, y en amplitud a la competencia jurisdiccional, social, ideológica y cultural que rige a América Latina y el Caribe en donde está adscrito México, el máximo órgano garante en la defensa de los derechos humanos de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha señalado el derecho a defender los derechos humanos como un derecho en sí mismo[[7]](#footnote-7), y determinó que los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que las defensoras y los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades y abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor.[[8]](#footnote-8)

Asimismo, en casos recientes de la Corte IDH[[9]](#footnote-9) se ha dejado de manifiesto que la labor realizada por las y los defensores de derechos humanos es considerada una tarea fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. La Organización de los Estados Americanos (en adelante OEA) ha señalado también que los Estados miembros de esa organización, deben reconocer la valiosa contribución de las y los defensores de derechos humanos en la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Reafirmando lo anterior, la Corte IDH ha considerado que la calidad de defensor de derechos humanos radica en la labor que se realiza, con independencia de que la persona que lo haga sea un particular o un funcionario público. Este órgano jurisdiccional ha referido que las actividades de vigilancia, denuncia y educación que realizan las y los defensores de derechos humanos no solo atienden a la protección de derechos civiles y políticos, sino que abarcan también los derechos económicos, sociales y culturales.

A su vez, la Corte IDH reconoce que existe un consenso internacional respecto a que las actividades realizadas por las defensoras y los defensores de derechos humanos son las de promoción y protección de los derechos humanos, entre otras. En este sentido también se han pronunciado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Consejo de la Unión Europea, la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea y la CIDH.

Asimismo, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución A/RES/53/144 de 1999, establece en su artículo 1° que “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Aunado a lo anterior, dichas actividades, a consideración de esta Corte, deben ser realizadas de forma pacífica, por lo que no se incluyen en este concepto los actos violentos o que propagan la violencia.

Además, la Corte IDH destaca que las mencionadas actividades de promoción y protección de los derechos humanos pueden ejercerse de forma intermitente u ocasional, por lo que la calidad de defensora de derechos humanos no constituye necesariamente una condición permanente[[10]](#footnote-10).

El argumento anterior se ve fortalecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en la resolución 70/1 de la Asamblea General de la ONU,[[11]](#footnote-11) en donde los líderes mundiales exhortaron a cumplir un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. En donde cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años; siendo 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social, ambiental y especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Por ello, la Agenda 2030 implica un compromiso común y universal, dotando una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe (México incluido), ya que contiene temas altamente prioritarios para la región; como en este caso particular es la defensa de los derechos humanos que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos, en donde los 17 objetivos se ven vinculados en la defensa de los derechos humanos para proveer un desarrollo sostenible en el respeto y garantía de la dignidad social. Sin embargo, es menester evidenciar que los objetivos que fortalecen esta labor de las y los defensores de derechos humanos son:

**Objetivo 10**: Sobre la desigualdad que enfrentan estas personas; en donde se exhorta:

**10.2** De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

**10.3** Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

**10.4** Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

**Objetivo 16:** Paz, justicia e instituciones fuertes, en donde se declara que, sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. En donde las defensoras y los defensores de derechos humanos nos convertimos en promotores de la cultura de paz en nuestras localidades; teniendo por cumplir las siguientes:

**16.1** Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

**16.2** Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.

**16.3** Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

**16.4** De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

**16.5** Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

**16.6** Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

**16.7** Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

**16.8** Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

**16.9** De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.

**16.10** Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

**16.a** Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

**16.b** Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

**Objetivo 17:** Alianza para lograr los objetivos, en donde se articula el compromiso decidido en cumplir cada uno de los objetivos y metas de desarrollo a través de las alianzas mundiales y cooperación de todos los sectores sociales, como lo son las y los defensores de derechos humanos; advirtiendo en este sentido las siguientes estrategias:

**17.1** Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

**17.2** Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.

**17.3** Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo.

**17.4** Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo.

**17.5** Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados.

[…]

Por lo anterior, atendiendo el margen de apreciación nacional de los Estados latinoamericanos, México ha edificado su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024[[12]](#footnote-12), en donde alude un capítulo sobre Política y Gobierno que exhibe las estrategias que articularan la defensa de los derechos humanos en la nación, priorizando la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos citando:

[…]

México ha recuperado los principios que hicieron de su política exterior un ejemplo mundial: no intervención, autodeterminación, relaciones con todos los pueblos basadas en la cooperación para el desarrollo, solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la guerra, respeto a los derechos humanos.

[…]

En donde se reafirma el compromiso de las y los promotores de paz que dedican sus mayores esfuerzos en el pleno respeto de todos los derechos humanos de todas las personas, incluidas las pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminadas. Además, el referido Plan precisa:

[…]

Pleno respeto a los derechos humanos que permee todas las acciones e instituciones de gobierno; se buscarán las reformas que permitan dotar de obligatoriedad legal, con sanción en caso de incumplimiento grave, a las resoluciones que emitan las comisiones nacionales y estatales de Derechos Humanos; el conocimiento y observancia de estos derechos será asignatura regular en la formación de los nuevos elementos policiales. Se excarcelará, en observancia de las disposiciones legales, a las personas que, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivos políticos y se buscarán las vías para dejar sin efecto los actos procesales de vinculación a proceso y los juicios penales originados por los acusados en actos de protesta legal y pacífica; se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El gobierno federal no tolerará los atropellos impunes desde el poder en contra de la ciudadanía.

[…]

Acorde a las reflexiones introductorias vertidas anteriormente, el Instituto brinda respuesta a los diversos reactivos realizados por la ACNUDH y la CIDH convencidos de que el cambio de prácticas interinstitucionales en la protección de la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, particularmente en México, representan una actual lucha en la que la alternativa más viable son los ejercicios que permitan evidenciar las violaciones a los derechos humanos y consecuentemente, las prácticas de exigencia que permitan al Estado cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

**II. Cuestionario elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [mayo de 2019]**

* **Nombre de la organización/institución:**

Instituto Autónomo de Occidente (IAO)

<https://iao.mx/>

* **Contacto y correo electrónico:**

Integrantes:

Mtro. José Benjamín González Mauricio

Mtro. Rafael Ríos Nuño

Lic. Alejandra Isabel Plascencia López

Lic. Martha María Guadalupe Orozco Reyes

Lic. Judith Ponce Ruelas

Mtro. Hermilo de Jesús Lares Contreras

Lic. Saúl Oswaldo Regla Dávila

Lic. Cristian J. Vargas Díaz

Correo:

[contacto@iao.mx](mailto:contacto@iao.mx)

* **País o sub-región (indique el país o sub-región en el que trabaja)**

Jalisco, México.

* **¿Podemos atribuir públicamente estas respuestas a usted o a su institución?**

Sí

**Preguntas:**

* **Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos:**

**¿Cuáles son los factores contextuales –positivos y/o negativos- que han tenido mayor impacto en la situación de las/os defensoras/es en su país y/o en la región desde 2016?**

En relación a esta interrogante, es necesario reflexionar y advertir la contextualización que enfrentan los derechos humanos en la sociedad, mismos que de acuerdo a su multicausalidad transitan en un reconocimiento, exigencia, tutela y reparación especializada, basada en procesos y escenarios que cada derecho humano representa.

Es así que, de acuerdo a las personas quienes dedican su trabajo a la lucha constante de la protección y defensa de los derechos humanos, se requiere relacionar su labor con factores generales tales como la geopolítica, la cultura, la historia y la economía del territorio donde se reconoce constitucional y convencionalmente la universalidad de estos. Asimismo, en cuestiones particulares, es importante señalar como factores contextuales el nivel de violencia que vive ese territorio, los usos, costumbres, idiosincrasia, normativa interna, así como el grado de aceptación que tengan las políticas progresivas en materia de derechos humanos que adopte el Estado, nación o territorio en comento.

Por ello, estos factores, representan tanto la facilidad, cobijo y coadyuvancia por la defensa de los derechos humanos, así como la materialización de escenarios hostiles de ataque y criminalización.

En la mayoría de la región latinoamericana, que a su vez forma parte de la OEA, han reportado que quienes defienden derechos humanos se ven orillados a una serie de limitaciones en la labor de defensa y observancia, en donde dicha actividad se criminaliza, lo que se traduce en el mal uso deliberado del derecho penal y de la inadecuada administración del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, entorpeciendo el legítimo derecho de las personas defensoras de derechos humanos.

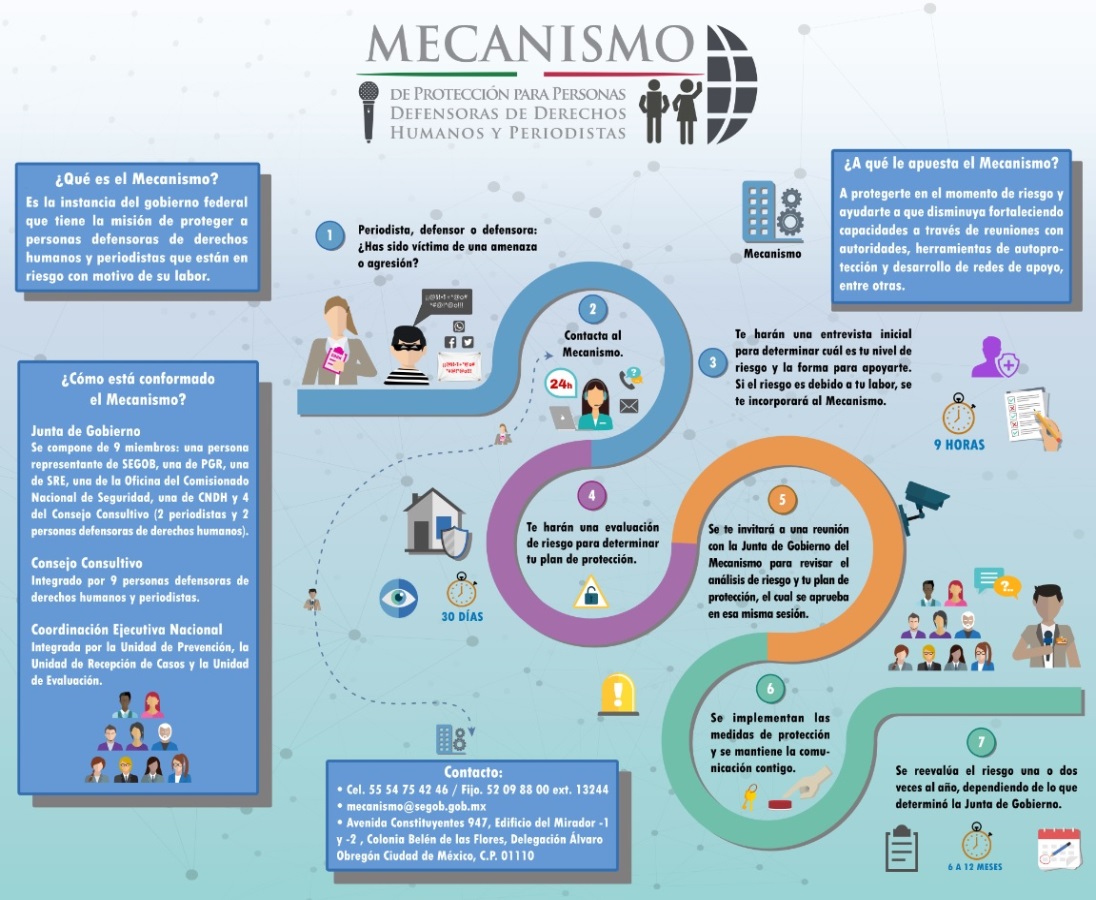
En donde estas prácticas se ejecutan a través de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos penales, los cuales pueden no ser conforme con el principio de legalidad, ni cumplir con los estándares internacionales mínimos de protección reconocidos por los mismos Estados; empero, al someterlos a largos procesos legales, es evidente que se trata de un mecanismo para subyugar su defensa, aplicando medidas precautorias, sin proteger sus derechos y garantías al debido proceso.

Ahora bien, respecto al margen de apreciación nacional mexicano, es menester señalar como principal contexto positivo la adhesión y reconocimiento de la defensa de los derechos humanos a través de su Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012; cuyo objetivo radica en la atención preventiva, de protección y riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en nuestro país, implementando en ello el mecanismos nacional de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Por lo que la operación del mecanismo nacional de protección marcó el inicio de la primera política pública en materia de protección de personas defensoras y periodistas ante la alarmante situación de riesgo y agresiones contra estas personas desde hace varios años y que ha sido señalada por diferentes organismos internacionales y regionales de derechos humanos, los cuales se han pronunciado al respecto para que el Estado mexicano atienda con urgencia y adopte una política integral de protección.

En virtud de lo anterior, el mecanismo cuenta con recursos para la implementación de medidas de prevención y protección, provenientes del fideicomiso público Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuyo objetivo es obtener recursos económicos adicionales a los asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que se destinen exclusivamente a la implementación de las medidas de prevención y protección que se han determinado con el objetivo de garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas beneficiarias del mismo.

Por lo que la ruta institucional del mecanismo nacional se desprende de la siguiente manera:



Datos extraídos del Mecanismo Nacional de defensores de derechos humanos y periodistas, disponible en: *https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas.*

Además, para brindar una atención integral y especializada, la Junta de Gobierno del mecanismo aprobó en enero de 2018, los *Lineamientos para el Reconocimiento a la Labor de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, diseñados con el apoyo de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Espacio OSC. En donde los referidos lineamientos constituyen una herramienta de política pública dirigida principalmente a servidores y servidoras públicas, con el objeto de establecer los criterios, contenidos y procedimientos para realizar acciones y construir mensajes para el reconocimiento explícito a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que contribuyan a la prevención de agresiones y a su protección, así como para el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia.

Teniendo el mecanismo nacional de personas defensoras de derechos humanos y periodistas una serie de reconocimientos en México:

* Reconocimiento a Personas Defensoras de Derechos Humanos que defienden a víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
* Reconocimiento a las Personas Defensoras de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Derechos a la Tierra y Territorio.
* Reconocimiento a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Chihuahua.
* Reconocimiento a Personas Defensoras de Derechos Humanos en la montaña de Guerrero.
* Reconocimiento a personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos.
* Reconocimiento a personas defensoras de migrantes.
* Reconocimiento a las y los defensores de derechos humanos de la Comunidad Indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla.

Por lo que estas acciones fortalecen y reafirman el compromiso que se debe de articular en México para que las personas defensoras de los derechos humanos puedan gozar de una profesión libre de violencia, persecución y criminalización por su actividad.

Lo anterior se ve fortalecido a través de la serie de armonización de las leyes domesticas que articulan la protección de las y los defensores de derechos humanos, tales como:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
2. Código Nacional de Procedimientos Penales;
3. Ley General de Atención a Víctimas;
4. Ley General de Acceso de las Mujeres a Una vida Libre de Violencia; la ley General de Igualdad entre hombres y mujeres;
5. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
6. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
7. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
8. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
9. Ley General de Archivos;
10. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogas en las entidades;
11. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
12. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y sus homólogas en las entidades;
13. Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, también debemos de evidenciar la nula operatividad transversal del mecanismo nacional de protección y de las instituciones públicas que aún no han logrado brindar una atención inmediata, idónea, efectiva y especializada al contexto particular que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.

Lo anterior, reforzado a la violencia que actualmente sufre el país, integrados por el (narcotráfico, crimen organizado y factor político).

Por lo que enMéxico y en Latinoamérica, dificultan la apropiación de espacios que naturalmente serían plataformas para la defensa de los derechos humanos desde distintos niveles institucionales.

**¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que originan factores de violencia y vulnerabilidad contra las personas defensoras de derechos humanos?**

Para este Instituto tenemos el posicionamiento que la principal causa de riesgo que enfrentan las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos es la no aceptación de la diversidad cultural e ideológica; en donde se concentra el repudio a la interculturalidad que se gesta en un lugar determinado.

En donde esta causa engloba dos vertientes que se deben de analizar por cuerdas separadas. Por un lado, la intolerancia que tiene la población en general a todo aquello que representa una forma diversa de pensamiento y creencia a los estándares sociales y culturales impuestos a lo largo de la historia del ser humano. Y por otro, la impunidad y corrupción que ha caracterizado al ente estatal responsable de la prevención, investigación, sanción y reparación de toda forma de violencia en contra de los derechos humanos.

Por lo que respecta a México, es importante advertir la ineficiencia de los mecanismos de protección que se encuentran sujetos por los poderes de los Estados, en particular por el poder ejecutivo, en donde éste es el primer responsable en obstaculizar la defensa de los derechos humanos.

Además, las complicaciones en la manera de trabajar en la defensa de los derechos a causas del crimen organizado, el narcotráfico y los actores políticos; en donde las personas defensoras de derechos humanos causan impacto social, atribuyendo a ello “un estorbo político” en el actuar institucional, en donde son etiquetados como espías y enemigos por el simple hecho de reportar los hechos a detalle, situación que no es “rentable” para los agentes políticos, el crimen organizado y narcotráfico.

**¿Cuáles son los principales avances y puntos fuertes de su país o en la región en la protección y promoción del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, y cuáles son los principales retrocesos y retos/desafíos?**

Desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, la obligación primordial de promover y proteger los derechos humanos y libertades les corresponden a los Estados, esto incluye ser garante de los derechos de todas y todos, ya sea individualmente o en asociación, para garantizar su debida protección y reconocimiento de las libertades fundamentales.

Es por ello, que el Estado mexicano se ha esforzado de sobremanera para evolucionar el sistema jurídico en diferentes ámbitos, con una participación fundamental de las diversas expresiones de la sociedad civil, defensoras/es de derechos humanos e investigadoras/es; lo que se vio plasmado con las reformas constitucionales que se han venido generando en aras de salvaguardar los derechos humanos.

Tal es el caso del intento de implementar mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos a partir de la creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En donde se han registrado 265 solicitudes de protección por parte de personas defensoras de derechos humanos a lo largo del 2012 a inicios del 2019, mismas que exhibimos en la siguiente tabla:

**Tabla número 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitudes de incorporación al mecanismo de protección por parte de personas defensoras de derechos humanos en México** | |
| **Año** | **Totales** |
| 2012 (octubre-diciembre) | 16 |
| 2013 | 50 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 33 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 50 |
| 2018 | 41 |
| 2019 (enero-marzo) | 7 |
| **Total** | **265** |

Nota: Tabla elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del *Informe estadístico marzo de 2019- Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, información actualizada al 31 de marzo de 2019. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe\_Estadistico\_Enero\_2019.pdf.*

Y mediante una segregación sectorial sobre los géneros, se logró desmembrar los siguientes datos de protección de defensoras y defensores de derechos humanos en México a través del mecanismo nacional de defensores:

**Tabla número 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protecciones a personas defensoras de derechos humanos en México de acuerdo a su identidad de género** | | | |
| **Año** | **Hombre (Cisgénero)** | **Mujer (Cisgénero)** | **Total** |
| 2012 | 17 | 28 | 45 |
| 2013 | 79 | 57 | 136 |
| 2014 | 27 | 16 | 43 |
| 2015 | 41 | 49 | 90 |
| 2016 | 37 | 45 | 82 |
| 2017 | 43 | 48 | 91 |
| 2018 | 81 | 71 | 152 |
| 2019 | 15 | 18 | 33 |
| **Total** | **340** | **332** | **672** |

Nota: Tabla elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del *Informe estadístico marzo de 2019- Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, información actualizada al 31 de marzo de 2019. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe\_Estadistico\_Enero\_2019.pdf.*

Mismos que podemos concluir con una igualdad de riesgo tanto como mujeres y hombre defensores de derechos humanos en el país.

**Grafica número 1**

Nota: Gráfica elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del *Informe estadístico marzo de 2019- Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, información actualizada al 31 de marzo de 2019. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe\_Estadistico\_Enero\_2019.pdf.*

Por lo que la contextualización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos representa un general desafío en México. Por un lado, cuenta con un marco normativo importante tanto en el sistema universal, así como en el sistema regional de protección a los derechos humanos, que, junto con su normativa interna, propician un escenario teórico favorable para la protección de los derechos humanos, así como los derechos de las personas que trabajan por su reconocimiento y defensa. Sin embargo, México ha sido reconocido como uno de los países más peligrosos del mundo para practicar la defensa de los derechos humanos (ONU, 2018).

Lo anterior, soportado por Michel Forst, Relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para las y los defensores de Derechos Humanos, que presentó a principios del 2018, ante el Consejo de Derechos Humanos de esa organización, un informe en el cual evidencia la violencia y criminalización que sufren las personas defensoras de derechos humanos en México, así como las personas periodistas. Destacando una especial y sistemática violencia y vulnerabilidad hacia el sector de mujeres defensoras de los derechos humanos (ONU, 2018).

Por lo cual, al contar en el país con los elevados índices de inseguridad y violencia que afrontan quienes defienden derechos humanos, a pesar de los progresos realizados en el ente federal, estatal y municipal, la violencia permanece latente y perturbando a la población en general. Aunado a la complicada dinámica con los carteles de drogas y crimen organizado y si a eso le añadimos el comportamiento de las fuerzas armadas llevando a cabo funciones de seguridad pública y el improbable retroceso a un enfoque de seguridad civil, deja abierta la puerta a una incertidumbre mayor. Lo anterior representando tanto un desafío como una realidad lamentable para los derechos humanos en ese Estado nación.

**¿Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos?**

Para contestar este reactivo, es necesario hacer una reflexión profunda en donde debemos de aceptar que la impunidad va ligada en teoría y práctica con la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos.

Por lo que en la medida en que la impunidad sea erradicada, las transgresiones a las defensoras y los defensores de los derechos humanos serán disminuidas y en su mejor supuesto, superadas. Y en este mismo sentido el que no se respete la norma y no sean castigados los hechos punibles ejecutados en contra de este sector, las agresiones, violaciones y delitos cometidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos seguirá constituyendo una práctica generalizada en el país.

Este Instituto considera que el inicio para erradicar estas violencias y estigmatizaciones a la labor de defender derechos humanos es el cambio de buenas prácticas dentro del andamiaje institucional, por ejemplo, todos los entes y organismos públicos deberían mantener en sus estructuras un mecanismo de control que vigile sus procedimientos con perspectiva inclusiva, especializada y transversal al nuevo lenguaje de los derechos humanos, así como políticas públicas, para que, en lugar de mitigar, se creen acciones afirmativas en red o transversales, las cuales coadyuven a generar un desarrollo óptimo en materia de seguridad para la defensa de los derechos humanos.

Además, dentro del actuar de las expresiones de la sociedad civil organizada, podrían articular redes temáticas entre aquellos grupos con prioridades y objetivos afines. Si bien ya existen, es necesario fortalecer las redes de manera que puedan institucionalizarse. Ello podría desembocar en un registro nacional integral que no sólo agrupe a las defensoras y los defensores, sino que les proporcione una plataforma para incidir en la agenda y les permita compartir estudios, experiencias y estrategias de acción. En el largo plazo, esa unión y visibilidad permitirá una mayor procuración de fondos y el establecimiento de alertas comunitarias frente a situaciones de riesgo para las defensoras y los defensores de derechos humanos.

* **Defensores/as en mayor situación de riesgo:**

**¿Cuáles son los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación de riesgo? Por favor, explique la diferente naturaleza de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres defensoras, integrantes de pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos.**

Es menester reiterar que, de acuerdo al Relator especial de la ONU para las defensoras y los defensores de derechos humanos, México representa el país más violento para mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (ONU, 2018).

Por lo que a través de la visión de los organismos internacionales que derivan su observancia a México, advierten que unos de los sectores vulnerables en la defensa de los derechos humanos son las comunidades indígenas y pueblos originarios. Lo anterior, debido a la protección y defensa que realizan respecto de las tierras que ocupan y que son consideradas como un elemento ancestral para sus pueblos, aspecto que se destaca en el informe final de la misión del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en México, de enero de 2017, el cual señala que uno de los grupos de defensores más criminalizados son los grupos que protegen y promueven los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente los de las comunidades indígenas (ONU, 2017). En este punto se rescata que no sólo son los ataques ejercidos en contra de esta población, los cuales no implican *per se* una violación a un derecho humano. Sin embargo, esta se ve materializada al momento que se ejecutan procesos judiciales o extrajudiciales y detenciones arbitrarias en los que no cuentan con la protección judicial correspondiente y por tanto se ve materializada la impunidad que caracteriza las violaciones a este sector de defensoras y defensores.

No obstante lo anterior, y de acuerdo a los registros reportados dentro del mecanismo nacional de defensores de los derechos humanos y periodistas en México se ha evidenciado el asesinato de las siguientes defensoras y defensores a lo largo del 2018, por los contextos de sus luchas sociales, siendo los siguientes datos:

**Tabla número 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Personas defensoras de derechos humanos asesinadas y documentadas en el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas**  **[México en el 2018]** | |
| Fechas | Datos generales |
| **1**. 18 de enero de 2018 | **Defensora:** Guadalupe Campanur Tapia.  **Localidad:** Chilchota, Michoacán.  **Agenda:** Comunera y una de las fundadoras de la ronda comunitaria de Cherán |
| **2**. 13 de febrero de 2018 | **Defensor:** Antonio Díaz Cruz.  **Localidad:** Miahuatlán, Oaxaca.  **Agenda:** Comité de Defensa de Derechos Indígenas (CODEDI). |
| * 1. e febrero de 2018 | **Defensor:** Basilio Ventura Martínez.  **Localidad:** Miahuatlán, Oaxaca.  **Agenda:** Comité de Defensa de Derechos Indígenas (CODEDI). |
| **4.** 13 de febrero de 2018 | **Defensor:** Luis Ángel Martínez.  **Localidad:** Miahuatlán, Oaxaca.  **Agenda:** Comité de Defensa de Derechos Indígenas (CODEDI). |
| **5.** 6 de marzo de 2018 | **Defensora:** María Luisa Ortiz Arenas.  **Localidad:** Taxco, Guerrero.  **Agenda:** Integrante de la Red Estatal Activistas Feministas de Guerrero. |
| **6.** 20 de marzo de 2018 | **Defensora:** María Guadalupe Hernández.  **Localidad:** Coroneo, Guanajuato.  **Agenda:** Defensora de los Derechos de las Mujeres y población LGBTTTIQ+. |
| **7.** 17 de abril de 2018 | **Defensor:** Luis Gutiérrez.  **Localidad:** Madera, Chihuahua.  **Agenda:** Integrante de Resistencia Civil Madera y Madero Unido. |
| **8.** 14 de mayo de 2018 | **Defensor:** Manuel Gaspar Rodríguez.  **Localidad:** Cuetzalan, Puebla.  **Agenda:** Integrante de la Coordinación Estatal del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP). |
| **9.** 14 de junio de 2018 | **Defensor:** Ramón Hernández.  **Localidad:** Namiquipa, Chihuahua.  **Agenda:** El Barzón Chihuahua. |
| **10.** 17 de junio de 2018 | **Defensor:** Roberto Vega.  **Localidad:** Taxco, Guerrero.  **Agenda:** Defensor de derechos LGBTTTIQ+. |
| **11**. 17 de junio de 2018 | **Defensor**: Rubén Estrada.  **Localidad:** Taxco, Guerrero.  **Agenda:** Defensor de derechos LGBTTTIQ+. |
| **12**. 17 de junio de 2018 | **Defensor:** Carlos Uriel López.  **Localidad:** Taxco, Guerrero.  **Agenda:** Defensor de derechos LGBTTTIQ+. |
| **13**. 19 de junio de 2018 | **Defensora:** Nataly.  **Localidad:** Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  **Agenda:** Diana Sacayán, transformarte es vivir A.C. |
| **14.** 18 de julio de 2018 | **Defensor:** Abraham Hernández González.  **Localidad:** San Pedro Pochutla, Oaxaca.  **Agenda:** Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI). |
| **15.** 22 de julio de 2018 | **Defensor:** Rolando Crispín López.  **Localidad:** Juchitlán, Oaxaca.  **Agenda:** Integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de la Defensa de la Tierra y el Territorio, de la Asamblea Popular Juchiteco. |
| **16.** 28 de septiembre de 2018 | **Defensor:** Jesús Javier Ramos Arreola.  **Localidad:** Tlalmanalco, Estado de México.  **Agenda:** Defensor del Cerro del Tenayo. |

Nota: Tabla elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del mecanismo nacional de defensores de derechos humanos y periodistas 2018. Disponible en: *https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articulos/personas-defensoras-de-derechos-humanos-asesinadas-2018.*

Por lo que de conformidad a los datos extraídos del mecanismo nacional de defensores de derechos humanos y periodistas se refleja que los grupos defensores susceptibles en una grave situación de riesgo son:

**Gráfica número 2**

Nota: Grafica elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del mecanismo nacional de defensores de derechos humanos y periodistas 2018. Disponible en: *https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articulos/personas-defensoras-de-derechos-humanos-asesinadas-2018.*

Evidenciando que las y los defensores de derechos humanos que se encuentran en una situación de riesgo de acuerdo a sus contextos, siguen siendo a los grupos históricamente discriminados, como lo son:

* Los pueblos originarios y comunidades indígenas; se enfrentan a la naturalización de la violencia en contra de sus costumbres, tierras y cosmovisión.
* La población de la diversidad sexual, personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales, queer y demás identidades no normativas al género binario y heteronormados; que enfrentan el reconocimiento y la reivindicación de sus derechos humanos indispensables de acuerdo a sus identidades y expresiones de género, así como de las orientaciones sexuales y rasgos biológicos, en donde desafortunadamente se contextualizan los crimines de odio hacia esta población.
* Las mujeres; atendiendo los factores sociales, culturales y antropológicos que estigmatizan a las mujeres en la toma de decisiones autónomas, y libres de violencia sistemática y simbólica en México.

**Respecto los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación de riesgo, ¿ve algún cambio desde 2016?**

De acuerdo a la evaluación reflejada en los informes del Relator de las Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, las situaciones de riesgo para las defensoras y los defensores de derechos humanos van en aumento, y pese la evolución normativa de los Estados y naciones, impera la impunidad que hace imposible la erradicación del problema.

Asimismo, debemos de enfatizar que las defensoras (incluidas la población LGBTTTIQ+) tienen necesidades específicas de protección, porque puede ser un factor de riesgo adicional la promoción y defensa de los derechos traduciéndose erróneamente como una amenaza al mantenimiento del *statu quo* patriarcal, lo que conlleva a que sufran si bien no un mayor número de ataques, si a que los soportan de distinta manera o los experimentan en una diferente naturaleza o en otros ámbitos que los hombres.

Si bien el Estado ha buscado implementar mecanismos especiales para proteger a las defensoras y defensores amenazados, no se ha alcanzado el resultado esperado, en razón a que debe primero legitimar públicamente su trabajo, y protegerlos desde el momento en que la autoridad pública toma conocimiento de que fue víctima de amenazas en razón de su trabajo.

**¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan las/os defensoras/es en materia de protección cuando realizan actividades tanto en la esfera pública como en la privada, incluso a través de medios digitales?**

De acuerdo al multicitado informe de la Organización de las Naciones Unidas, uno de los principales desafíos para las personas defensoras de derechos humanos, son los que enfrenan las mujeres defensoras (incluidas las mujeres lesbianas, trans e intersexuales). Ellas, son las que de manera especial se enfrentan a un panorama en el que desafían la misoginia y la idiosincrasia de una nación donde históricamente ha regido el patriarcado. Esto propicia que enfrentan escenarios de discriminación, violencia de género y trabas importantes por su condición de mujer.

No obstante lo anterior, es necesario advertir que el desafío más grande a enfrentar será los prejuicios y a la cerrazón de ciertos sectores. En el largo plazo, ello sólo puede combatirse mediante una política educativa (correspondiente a todos los niveles formativos) que integre valores y principios de inclusión de manera transversal.

* **Agresiones y restricciones:**

**¿Cuáles son las cifras más actualizadas de agresiones y restricciones contra defensoras/es en el país o región? Por favor, señale la fuente de información e indique el periodo que abarca.**

En atención a este cuestionamiento y de conformidad a los datos concentrados en el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, reportan las siguientes agresiones y restricciones por parte de servidoras/es públicos, particulares y personas no identificadas:

**Tabla número 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos reportados dentro del mecanismo de protección en México** | | | | |
| **Año** | **Servidoras/es publicas/os** | **Particulares** | **No identificados** | **Total** |
| 2012 | 8 | 10 | 4 | 22 |
| 2013 | 32 | 15 | 17 | 64 |
| 2014 | 10 | 4 | 5 | 19 |
| 2015 | 17 | 16 | 24 | 57 |
| 2016 | 10 | 20 | 24 | 54 |
| 2017 | 14 | 19 | 19 | 52 |
| 2018 | 19 | 18 | 8 | 45 |
| 2019 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| **Total** | **110** | **105** | **104** | **319** |

Nota: Tabla elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del *Informe estadístico marzo de 2019- Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, información actualizada al 31 de marzo de 2019. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe\_Estadistico\_Enero\_2019.pdf.*

Lo que se puede verificar que el gran índice radica a través de las y los servidores públicos que son quienes operan es sistema de impartición de justicia en México.

**Grafica número 3**

Nota: Gráfica elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del *Informe estadístico marzo de 2019- Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, información actualizada al 31 de marzo de 2019. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe\_Estadistico\_Enero\_2019.pdf.*

No obstante lo anterior, debemos de reflexionar que los datos que refleja el mecanismo de protección en México sólo son aquellos datos registrados en El Sistemas, más no omitimos la existencia de aquellos que por su naturaleza no se reportan[[13]](#footnote-13).

**¿Cuáles son los principales tipos de agresiones y restricciones contra defensoras/es en el país o región? ¿Ve algún cambio desde 2016? Si es posible, identifique si hay algún área geográfica que deba ser resaltada.**

En atención particular a este reactivo es necesario remitirnos a la tabla número 2 y gráfica número 3, en donde se evidencia que la más grave agresión que pueda tener una defensora y defensor promotor de la paz será siempre el atentado contra su vida.

Asimismo, y tomando en cuenta la situación tanto de personas defensoras como de periodistas las relatorías de la CIDH y Naciones Unidas, en la región advierten las siguientes situaciones que afectan directamente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas:

1. Asesinatos, ejecuciones y desapariciones forzadas;
2. Agresiones, amenazas y hostigamientos;
3. Actividades de inteligencia y otras injerencias ilegales, arbitrarias o abusivas;
4. Criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos, a través del uso indebido del derecho penal para paralizar o deslegitimar sus causas[[14]](#footnote-14), lo que incide directamente en los derechos a ser protegidos/as, a la libertad de expresión, de reunión, protesta social y de asociación;
5. Estigmatización de la labor que desempeñan;
6. Uso desproporcionado de la fuerza pública, especialmente en escenarios de protesta social;
7. Impunidad en las investigaciones relacionadas con las violaciones a personas defensoras y periodistas, así como al derecho al recurso efectivo de conformidad con el debido proceso;
8. Violencia de género y contra las mujeres; y
9. Limitaciones al derecho de libertad de asociación por procedimientos de inscripción complejos y prolongados.

Sin embargo, en México el contexto no es ajeno a estas circunstancias, desprendiendo los siguientes tipos de agresiones reportadas en el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas:

**Tabla número 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipos de agresiones más frecuentes a personas defensoras de derechos humanos reportadas en el mecanismo de protección en México** | | | | |
| **Año** | **Secuestro/ privación de la libertad** | **Agresiones físicas** | **Amenazas** | **Total** |
| 2012 | 1 | 5 | 15 | 21 |
| 2013 | 3 | 15 | 44 | 62 |
| 2014 | 0 | 6 | 15 | 21 |
| 2015 | 1 | 6 | 25 | 32 |
| 2016 | 0 | 4 | 42 | 46 |
| 2017 | 0 | 15 | 34 | 49 |
| 2018 | 4 | 14 | 25 | 43 |
| 2019 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| **Total** | **9** | **68** | **204** | **281** |

Nota: Tabla elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del *Informe estadístico marzo de 2019- Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, información actualizada al 31 de marzo de 2019. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe\_Estadistico\_Enero\_2019.pdf.*

Resultando la agresión más constante, las amenazas dirigidas a las defensoras y los defensores de derechos humanos con el 73% de las demás agresiones:

**Gráfica número 4**

Nota: Grafica elaborada por el IAO con datos del *Informe estadístico marzo de 2019- Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, información actualizada al 31 de marzo de 2019. Disponible en: [*https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe\_Estadistico\_Enero\_2019.pdf*](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe_Estadistico_Enero_2019.pdf)*.*

De suerte que el ejemplo de ataques más habituales podría evidenciarse que continúan siendo las amenazas y las injerencias arbitrarias por medio de allanamientos a las oficinas de las organizaciones, robo de información vía electrónica o denuncias falaces que se traducen en detenciones ilegales.

Si bien, se han venido generando procesos cuyo paulatino fortalecimiento favorece el cumplimiento e implementación tangible de varias medidas, las que brindarían un impacto positivo para el pleno ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en el Estado mexicano, sin embargo, aún los efectos esperados no se ven manifestados a la dimensión del detrimento generado.

Por su parte, la adopción en 2011 de la reforma constitucional en derechos humanos propuso una aprobación política y jurídica ineludible al inmenso conjunto de activistas. Sin embargo, la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada el 25 de junio de 2012 simbolizó el reconocimiento a la necesidad de proteger, desde una plataforma legal, a las personas y organizaciones cuyas participaciones resultan indispensables para la salvaguarda de los derechos humanos, empero, el mecanismo de protección establecido por la ley aún se encuentra en una etapa de consolidación.

En este sentido, para reducir las agresiones a esta población se han registrado una serie de medidas cautelares tanto a nivel regional, nacional y estatal en México para lograr la máxima protección de la labor que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos:

**Tabla número 6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismos que emitieron medidas cautelares para personas defensoras de derechos humanos** | | | | | | |
| **Año** | **Comisión Interamericana de Derechos Humanos** | **Comisión Nacional de Derechos Humanos en México** | **Las Comisiones Estatales de Derechos Humanos en México** | **Procuraduría General de la República** | **Otros** | **Totales** |
| 2012 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 2013 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 20 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 2017 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 17 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **9** | **9** | **7** | **9** | **33** | **67** |

Nota: Tabla elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del *Informe estadístico marzo de 2019- Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, información actualizada al 31 de marzo de 2019. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe\_Estadistico\_Enero\_2019.pdf.*

Siendo las medidas de protección más frecuentes las siguientes:

**Tabla número 7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipos de medidas de protección otorgadas por el mecanismo nacional a personas defensoras de derechos humanos en México** | |
| **Medidas de protección** | **Total**  **[Octubre 2012-marzo 2019]** |
| Escolta y acompañamiento | 67 |
| Inmuebles con infraestructura | 53 |
| Bienes físicos | 125 |
| Telecomunicaciones | 12 |
| Botón de asistencia | 363 |
| Patrullaje | 173 |
| Gestiones | 52 |
| Directorios | 228 |
| Manual de autoprotección | 45 |
| Presentación de denuncias | 20 |
| Otros | 468 |
| **Total** | **1606** |

Nota: Tabla elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del *Informe estadístico marzo de 2019- Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, información actualizada al 31 de marzo de 2019. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe\_Estadistico\_Enero\_2019.pdf.*

Sin embargo, el índice de conclusiones de estos casos en México recurre en los siguientes factores por parte de las y los defensores de derechos humanos y por parte de las y los operadores del mecanismo nacional de protección:

**Tabla número 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Expedientes concluidos de personas defensoras de derechos humanos a través del mecanismo de protección en México** | | | | | | |
| **Año** | **Desistimiento** | **No localización** | **Falta de interés** | **Disminución de riesgo** | **otras** | **Total** |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2013 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 18 |
| 2014 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 2015 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Total** | **9** | **5** | **8** | **33** | **9** | **64** |

Nota: Tabla elaborada por el Instituto Autónomo de Occidente con datos del *Informe estadístico marzo de 2019- Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, información actualizada al 31 de marzo de 2019. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438601/Informe\_Estadistico\_Enero\_2019.pdf.*

**¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de agresores/perpetradores? ¿Son éstos actores estatales o no estatales?**

Este Instituto cree importante considerar los siguientes aspectos:

En primer punto, entiéndase la criminalización a las personas defensoras de derechos humanos como el punto central y general de prácticas que pueden constituirse, por un lado, en una violación a un derecho humano, y por otro, un acto criminal que puede materializarse dentro de la tipificación de un delito. Es decir, evidenciar la violencia que se comete en contra de este sector de la población mientras no se investigue y sancione, constituirá una **omisión** del Estado que genera una violación a un derecho humano. Cuando los actos son cometidos por entes del Estado o con aquiescencia de éstos, también se verá materializada por **acción**, una violación a un derecho humano.

No obstante, la impunidad y falta de investigación no permite identificar con claridad la procedencia de quiénes ejercen directamente estas prácticas. Sin embargo, no se descarta la configuración teórica de un delito. Pero mientras persista la impunidad, seguirán siendo prácticas aisladas y técnicamente hablando, como una violación a un derecho humano.

**¿Cuáles son las consecuencias y el impacto de las agresiones y restricciones a nivel individual y colectivo (tanto en el ámbito del espacio organizativo como en espacios sociales más amplios)?**

El impacto de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos trasciende a los múltiples pronunciamientos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, en los cuales se insta a diversas autoridades a la investigación, sanción y consecuente reparación por motivos de actos de criminalización a las personas defensoras de derechos humanos, no obstante, de acuerdo al Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México “El resultado esperado aún no se refleja a la escala y extensión del daño sufrido por las y los activistas, ni al de la necesidad de justicia, reparación y garantías de no repetición que exigen sus casos” (La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, 2013, p. 46)

Sin embargo, y de acuerdo al desarrollo de esta proyección informativa, se evidencia que además algunas de las consecuencias son:

1. Desistimiento de la profesión.
2. Ser parte de la corrupción y publicar notas tendenciosas.
3. Publicar notas a medias.

**¿Qué tipos de agresiones afectan especialmente a mujeres defensoras (en ámbitos urbanos y rurales, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, y otros grupos)?**

De acuerdo al informe final de la misión del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en México, de enero de 2017, las mujeres defensoras enfrentan violencia y discriminación tanto en sus familias, así como en las comunidades donde ejercen su labor (ONU, 2017). Señala el informe que esto se debe principalmente a que irrumpen con el papel que se les fue conferido tanto social como culturalmente.

La discriminación sufrida por este sector se puede ejemplificar al momento que agentes del Estado no otorgan o dificultan la solicitud de medidas de protección ante alguna amenaza (ONU, 2017).

Por lo que ve a las personas defensoras de comunidades indígenas, éstos, al representar minorías respecto de la población total del Estado-Nación, se enfrentan a panoramas de suma complejidad en la defensa y lucha por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El citado informe del Relator especial para los defensores de derechos humanos (2017) rescata esta idea a plantear que, además de las mujeres, el sector que sufre en mayores grados los estragos de la impunidad en México, son quienes defienden los derechos de la colectividad indígena. Esta violencia encuentra su génesis en los grupos armados que operan en colusión con autoridades y compañías locales que se oponen a la no extracción de recursos que para estas comunidades resultan indispensables dentro de sus usos y costumbres, asimismo se enfrentan a la discriminación en la protección de sus derechos por razones lingüísticas y geográficas (ONU, 2017) las que, de acuerdo a ese informe, se materializan desde el acoso, la tortura, el asesinato o la desaparición forzada de la defensora o defensor.

* **Garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos:**

**¿Considera que hay algún aspecto del marco normativo, institucional y de políticas públicas que promueve o dificulta el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos?**

Se ha referido en interrogantes previas que, el marco normativo mexicano respecto de la garantía de los derechos humanos conforma una normativa muy noble, no obstante, habrá que señalarse que el Estado cumple con sus funciones de prevención, investigación, sanción y reparación (art. 1°, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) a través de sus instituciones, las cuales, siguen ejerciendo prácticas discriminatorias y omisas respecto de estas cuatro principales obligaciones que tiene el Estado mexicano tanto constitucional como convencionalmente. Las personas que trabajan al servicio del Estado a través de sus diversas instituciones, tanto administrativas como ministeriales, siguen ejerciendo prácticas que no van en concordancia con la nobleza del marco normativo que protege los derechos de todas las personas que se encuentran en territorio mexicano. Esto se materializa al momento que, de forma activa u omisiva incumplen con el principio de legalidad, esto por desconocimiento, prejuicio o cultura instituida a lo largo de la historia.

Con lo anterior, se pretende evidenciar que mientras no se apliquen las normas, así como los estándares internacionales que obligan al Estado mexicano a proteger el derecho de todas las personas por igual, el marco normativo quedará en un primer intento de cumplimiento, mas no en la verdadera materialización de la garantía de los derechos humanos.

Ahora bien, y no menos importante el en Instituto nos pronunciamos además sobre la legislación en materia de acceso a la información pública dentro del territorio nacional, a lo que ponemos a consideración el siguiente marco comparativo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterios | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios[[15]](#footnote-15) | Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México[[16]](#footnote-16) | Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública[[17]](#footnote-17) |
| Fechas de respuesta y de entrega de información | -Si la información le falta un requisito, el sujeto obligado deberá notificarlo a los dos días hábiles siguientes a su presentación para que los subsane dentro de los dos días posteriores, so pena de tenerla como no presentada.  -El sujeto obligado tiene hasta ocho días hábiles después de recibida la solicitud para responder.  -Si la información tiene que ver con expedientes médicos o datos de la salud del solicitante, se deberá dar respuesta en un plazo de cuatro días hábiles.  (Art. 84 de la Ley). | -Cuando sea notoria la incompetencia de la Unidad de Transparencia, deberá notificarlo dentro de los tres días hábiles siguientes y señalarle al solicitante quién de los sujetos obligados podría ser el competente.  -En caso de que a la solicitud le falte un requisito de ley, el sujeto obligado mandará requerir al solicitante dentro de los tres días hábiles siguientes en que se presentó la solicitud, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las omisiones, so pena de que en caso de que no se aclare, se tendrá como no presentada.  -La respuesta no podrá exceder de los nueve días hábiles contados a partir de su admisión.  (Art. 212 de la Ley). | Hasta 20 días hábiles, pudiendo ampliarse hasta 10 días más siempre y cuando se funde y motive tal ampliación.  (Art. 132 de la Ley). |
| Alcances y limitaciones | Alcances:  -Reconoce el derecho a la información como derecho humano  -Transparenta el ejercicio de la función pública  -Garantiza el derecho de acceso a la información  -Protege los datos personales  Limitaciones:  -No prevé mecanismos suficientes para la protección de datos personales, (si bien es cierto, existe un reglamento, lineamientos y criterios, en la práctica quedan rebasados).  -No establece procedimientos de verificación.  -No contiene el tema de datos y gobierno abierto.  -No se complementa con temas de la archivística.  (Arts. 1 a 129 de la Ley). | Alcances:  -Reconoce expresamente el derecho de acceso a la información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas.  -Reconoce el derecho de acceso a la información como el derecho humano a solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.  -Reconoce expresamente la interpretación conforme y el principio *pro personae*.  -Plataforma Local de Transparencia.    Limitaciones:  -No advierte el derecho de protección de datos personales (supongo porque cuenta con su normatividad especial).  -No existen temas de archivos.  (Arts. 1 a 274 de la Ley). | Alcance:  La Ley General tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, así como distribuir competencias y aterrizar a la transparencia proactiva.  Limitaciones:  Volver homogéneas las leyes de transparencia me parece certero, sin embargo, existían legislaciones estatales que eran más benéficas que la propia Ley General en asuntos de plazos, por ejemplo, de solicitudes de información.  (Arts. 1 a 216 de la Ley). |
| Órgano garante y sus atribuciones | -Promover la cultura de la transparencia;  -Asesorar a la población;  -Promover la digitalización;  -Capacitar;  -Elaborar instrumentos legales;  -Validar y evaluar las actuaciones de los sujetos obligados;  -Conocer de los recursos;  -Imponer sanciones;  -Vigilar e interpretar la ley.  (Art. 35 de la Ley). | -El Instituto es responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley, dirigir y vigilar el ejercicio de los Derechos de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General y la Ley local. En su organización, funcionamiento y control, el Instituto se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.  -Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, y rendición de cuentas.  -Interpreta, aplica y hace cumplir los preceptos aplicables de la Ley General, de la Ley local y los que de ella se derivan.  -Garantizar en el ámbito de su competencia, que los sujetos obligados cumplan con los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad en materia de transparencia y acceso a la información pública señalados en la Ley General, la Ley local, y demás disposiciones aplicables.  -Para cumplir con su finalidad, el Instituto podrá realizar toda clase de actos y procedimientos que la presente Ley, su Reglamento Interior y demás normativa de la materia le señalen.  (Arts. 51 a 53, y 133 de la Ley). | Nivel federal: Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)  Nivel estatal: Órganos garantes de los Estados.  Atribuciones del INAI:  -Interpretar la Ley General;  -Conocer de los recursos de revisión;  -Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia;  -Promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en la materia;  -Suscribir convenios;  -Elaborar informes;  -Establecer medidas de sanción y apremio.  (Art. 41de la Ley). |
| Medios de defensa | -Recurso de Revisión;  -Recurso de Revisión de Oficio;  -Recursos de Transparencia (denuncias por falta de publicación de información fundamental);  -Recursos de Protección de Datos Personales;  -Recurso de inconformidad (cuando el órgano nacional resuelve);  -Recurso de atracción;  -El amparo;  -Revisión de amparo.  (Título Sexto de la Ley). | -Recurso de revisión;  -Recurso de Inconformidad ante el Instituto Nacional;  -Cumplimiento de la resolución;  -Denuncia incumplimiento a las obligaciones de transparencia;  -Proceso de Verificación.  (Título Octavo de la Ley). | -Recurso de revisión;  -Recurso de inconformidad;  -Recurso de revisión en materia de seguridad nacional;  -Recursos de revisión de asuntos jurisdiccionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  (Título Octavo de la Ley). |
| Sanciones | Infracciones van a los titulares de los Sujetos Obligados, titulares de las Unidades de Transparencia, titulares de los Comités de Transparencia, personas físicas o jurídicas, las sanciones van desde administrativas: consistentes en amonestaciones públicas con copia al expediente laboral; penales: delitos en materia información pública y tratamiento indebido de datos personales; Civiles: daños y perjuicios a instancia de parte agraviada.  (Título Séptimo de la Ley). | -Infracciones al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: I. Amonestación pública, o II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México.  En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas como causas de sanción en esta Ley, deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.  (Título Noveno de la Ley). | I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata;  II. Amonestación pública;  III. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área geográfica de que se trate.  (Título Noveno de la Ley). |
| Procedimientos para el acceso | Etapas:  I. Presentación de la solicitud de información;  II. Integración del expediente y resolución sobre la procedencia de la solicitud de información;  III. Acceso a la información pública solicitada, en su caso.  (Art. 77 de la Ley). | Etapas:  I. Presentación de la solicitud;  II. Integración del expediente;  III. En su caso, admisión de la solicitud;  IV. Acceso a la información, en su caso.  (Título Sexto de la Ley). | Etapas:  I. Presentación de la solicitud;  II. Integración del expediente;  III. En su caso, admisión de la solicitud;  IV. Acceso a la información, en su caso.  (Título Séptimo de la Ley). |
| Requisitos para solicitar la información | La solicitud de información pública debe hacerse en términos respetuosos y contener cuando menos:  I. Nombre del sujeto obligado a quien se dirige;  II. Nombre del solicitante y autorizados para recibir la información, en su caso;  III. Domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la Unidad, para recibir notificaciones;  IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la cual estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que resuelva el sujeto obligado.  (Art. 79 de la Ley). | I. La descripción del o los documentos o la información que solicita;  II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, ésta se realizará por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que corresponda; y  III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico.  (Art. 199 de la Ley). | I. Nombre;  II. Domicilio;  III. La descripción de la información solicitada;  IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información.  (Art. 124 de la Ley). |
| Papel de las autoridades | -Velar por el derecho de acceso a la información;  -Velar por el derecho de la protección de datos personales;  -Promover la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado de Jalisco.  (Art. 25 de la Ley). | Obligación expresa de entregar la información relacionada con el uso, destino y actividades al sujeto obligado que entregue el recurso, subsidio u otorgue el estímulo, supervise o coordine estas actividades, y dicho sujeto será obligado solidario de la misma de hacerla pública.  (Art. 24 de la Ley). | Tutelar el derecho de acceso a la información bajo los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.  (Art. 24 de la Ley). |
| Otros aspectos relevantes | De las tres leyes comparadas, la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco es la única que contiene en su interior un procedimiento de protección de información confidencial.  (Art. 66 a 76 de la Ley). | Reconocen el derecho de rendición de cuentas y gobierno abierto, cuentan con su propia Plataforma Local de Transparencia, asimismo cuentan con procedimientos de verificación, aunado a lo anterior los plazos de reserva de la información son muy cortos (tres años, cuando en Jalisco, son hasta diez), obliga a las personas físicas o jurídicas que reciben recursos públicos y/o ejercen actos de autoridad de forma expresa a transparentar y permitir el acceso de la información a los ciudadanos.  (Título Primero de la Ley). | Lo más relevante a mi parecer sobre esta Ley es que ya se toma el tema de la transparencia proactiva y gobierno abierto.  Asimismo, me parece muy novedosa e interesante la facultad de atracción que le otorga la Ley al INAI para dirimir las controversias más representativas en la materia.  (Título Primero de la Ley). |

Se considera que las tres leyes de transparencia que se mencionaron son similares en lo que respecta a los apartados de alcances, atribuciones de los órganos garantes, procedimiento de acceso, requisitos para presentar una solicitud y el papel de las autoridades, ya que todos van enfocados al respeto al derecho humano de acceso a la información, y con ello garantizar el ejercicio de otros derechos, como el acceso a la justica, la educación o, para el caso que nos ocupa, el derecho a defender derechos humanos; así como a la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, facilitando en todo momento los procedimientos de acceso a la información y estableciendo pocos requisitos para los peticionarios que desean obtener información pública, ya que como es sabido uno de sus principios fundamentales es el de la mínima formalidad y en algunos casos opera la suplencia de la deficiencia.

Sin embargo, lo que respecta a los plazos, son muy diferentes y la Ley General establece todavía un plazo mucho más amplio.

Por su parte, todos los órganos garantes tienen por objeto promover la cultura de la transparencia y de la protección de datos personales, así como hacer valer los postulados de las distintas leyes en la materia y sancionar a aquellos funcionarios y servidores públicos que vayan en contra de sus principios, en el caso de México, a los órganos garantes se les confiere plena autonomía constitucional para poder desempeñar de forma libre e imparcial su labor (2014 fue el año en que se reformó la Constitución Federal para dar autonomía a los órganos garantes nacionales).

La autonomía de los órganos garantes es un paso importante que el legislador realizó de manera atinada, es evidente que el control interno es importante para que puedan desempeñar su labor de forma imparcial. Sin embargo, aunque de *iure* esté considera la autonomía, de *facto* esto a veces no se ve materializado, toda vez que quienes encabezan a dichos órganos garantes, los elige el congreso, por lo que el partido mayoritario es quien los designa.

Por otro lado, es evidente que también son diferentes los plazos en lo que respecta a las fechas de entrega, los alcances y limitaciones, así como en los medios de defensa. Justo es en este apartado donde se pueden ver las mayores deficiencias en las leyes de transparencia, pues al cotejar las tres, es notable que dos de ellas establecen tiempos muy largos (Ley de Ciudad de México, así como la General) para entregar la información, y que dos de ellas cuentan con muy pocos recursos para que los ciudadanos puedan defenderse de las respuestas que emiten los sujetos obligados[[18]](#footnote-18), tanto en materia de acceso a la información como de protección de datos personales.

Además, los criterios de reserva de la información o inexistencia también son diferentes, cuentan por ejemplo con lapsos bastante largos para reservar. Se cree que también fue atinado el hecho de que el legislador estableciera medidas de control en ese sentido, es decir, pide que antes de reservar la información se revise cada uno de los archivos, no se permite el principio de la reserva absoluta de documentos –aunque en la práctica es bastante común por las autoridades y sumado el poco o nulo conocimiento de las personas, poco se reclama por los ciudadanos–, aunado a ello se debe realizar una prueba de daño por el Comité de Transparencia, que acredite que realizó dicha prueba de forma exhaustiva o la búsqueda en su caso y la expedición de la respectiva acta de reserva o su inexistencia, es decir, se obliga a los órganos, organismos de gobierno o autoridades a que funden y motiven la negativa.

Sin embargo, como se dijo, debido a que las personas poco conocen de los derechos que otorgan las leyes en la materia de acceso a la información, es bastante común que las personas presenten su solicitud, los sujetos obligados contestan o no contestan, cuando lo hacen muchas de las veces no se responde lo que se pidió, y las personas debido a la falta de información, se quedan con esa respuesta (o no) y ya no hacen más, cuando las leyes les dan recursos, cuando el acudir al órgano garante a interponer una queja, e incluso en caso de que no se esté conforme con dicha resolución, se puede recurrir al órgano garante nacional.

Finalmente, se considera que las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública cumplen con los principios mínimos, básicos, que son los siguientes:

1. Máxima publicidad: este principio señala que siempre se debe optar por los derechos que más favorezcan a la divulgación de la información, es un instrumento idóneo para conducirnos a un entorno democrático en que se privilegien el derecho a la información y la transparencia (Kubli-García, 2010, p. 861).
2. Gratuidad: con la pretensión de que se asegure el derecho al acceso a que la información, se busca que sea accesible para el mayor número de personas. Sin embargo, la reproducción de la información y su envío por correo postal, pueden estar sujetos al pago del soporte en que se entregue dicha información, o de un derecho o canon, en su caso (Villanueva, 2006).
3. Oportunidad: se refiere a que la información debe publicarse y actualizarse periódicamente (conforme se genere) en tiempo por los sujetos obligados, para preservar su valor y utilidad en la toma de decisiones de los usuarios interesados en dicha información (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2006, p. 26).
4. Veracidad: este principio protege la seguridad que debe tener la ciudadanía en que la información entregada es verificable, cierta y que, en su caso, fue debidamente clasificada. El principio de veracidad también permite la certeza de que la información recibida, en los casos de duplica o reproducción, es fidedigna de la que se encuentra en los archivos o registros de los entes públicos (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2006, 26).
5. Procesos para facilitar el acceso: se requiere que se establezcan procedimientos claros según los cuales las entidades públicas tramitarán solicitudes de información. Además, requiere un sistema para la revisión independiente de las decisiones internas por las entidades públicas (Mendel, 2008, p. 39).
6. Protección para denunciantes: la protección a funcionarios/as de responsabilidad que, de buena fe, divulguen información con arreglo a la legislación del derecho a la información. Esta protección es importante para cambiar la cultura del secreto dentro del gobierno (Mendel, 2008, p. 43).

Se busca que brinda además una protección similar a los individuos que entregan información sobre los actos incorrectos, periodistas o denunciantes.

1. El deber de publicar: un acceso efectivo para muchas personas depende de que estas entidades publiquen y difundan activamente categorías clave de información aun en ausencia de alguna solicitud. El alcance de esta obligación depende hasta cierto punto de las limitaciones de los recursos, pero la cantidad de información cubierta debe incrementarse con el tiempo, particularmente a medida que las nuevas tecnologías faciliten la publicación y difusión de la información (Mendel, 2008, p. 35).
2. Promoción del gobierno abierto: promover una cultura de apertura, una amplia conciencia pública de la ley de acceso a la información. El éxito a largo plazo depende de convencer a los funcionarios/as públicos/as que la apertura no sólo es una obligación sino también un derecho humano fundamental, y central para la gobernanza eficaz y apropiada (Mendel, 2008, p. 36).
3. Reuniones abiertas: la justificación del derecho a la información se aplica, en principio, no sólo a la información en forma registrada, sino también a las sesiones de las entidades públicas. En otras palabras, no debe marcarse mucha diferencia si la información en cuestión se transmite mediante un registro permanente u oralmente durante una reunión (Mendel, 2008, p. 42).
4. La transparencia tiene procedencia: esto quiere decir que, la ley que establezca el derecho de acceso a la información debe tener procedencia sobre las leyes de confidencialidad. Cuando sea posible, esto debe lograrse aplicando una interpretación restrictiva de leyes sobre confidencialidad. Sin embargo, cuando se presente un conflicto más grave que no pueda resolverse de esta manera, la ley sobre el derecho de información podrá sobreponerse a la ley de confidencialidad que está en conflicto (Mendel, 2008, p. 42).
5. Limitación a las excepciones: es importante que todos los intereses legítimos de confidencialidad sean atendidos adecuadamente, porque de otra manera se requerirá legalmente que las entidades públicas divulguen información, aunque les cause perjuicios exagerados. Las excepciones, deben estar previstas por vía legal y en respuesta a un “peligro real e inminente que amenace a la seguridad nacional en las sociedades democráticas, además de la privacidad y las investigaciones policíacas (Mendel, 2008, p.37).

Como ya se había mencionado, para que los gobiernos puedan negar la información, los principios en materia de transparencia establecen una prueba en tres partes para las excepciones (en la legislación mexicana se le conoce como prueba de daño).

La prueba de tres partes:

1. La información debe relacionarse con una finalidad legítima enumerada en la ley;
2. La divulgación debe plantear la amenaza de un perjuicio sustancial para esa finalidad; y
3. El perjuicio para la finalidad debe ser mayor al interés público en contar con la información.

La reforma de mayo de 2015, trajo consigo una serie de cambios y transformaciones en los ordenamientos jurídicos existentes, pues su objetivo primordial es ganarle terreno al fenómeno tan complejo llamado corrupción que ha nacido en detrimento de la economía, la desigualdad social y la pérdida de la credibilidad en las instituciones, asimismo ha lastimado profundamente las bases con las que se crearon las naciones, el bien común, la paz social y el desarrollo.

Motivo por el cual, surge la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción[[19]](#footnote-19), misma que se sustenta al menos en los siguientes elementos:

1. Se dotarán de más y mejores facultades de investigación e intervención a los órganos internos y externos de la administración pública.
2. La armonización entre la participación ciudadana y las instituciones, con la finalidad de crear pesos y contrapesos en materia de rendición de cuentas, es decir, la coalición del derecho de los ciudadanos a exigir y acceder a la información concerniente al uso de los fondos públicos, así como el derecho del funcionario a argumentar y fundar sus decisiones que afectan a la colectividad.
3. La implementación de una metodología con la finalidad de medir el fenómeno de la corrupción, realizar evaluaciones de avances y retrocesos, obtener y producir información sobre la materia, la emisión de reportes e informes que den cuenta de las decisiones y los resultados del sistema, así como la formulación de proyectos de correcciones o modificaciones de procesos, normas y situaciones que generen o faciliten actos de corrupción.

Resulta importante hacer mención que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción no viene a funcionar de manera independiente, sino que su creación de debe en gran medida para la complementación o armonización con otros ordenamientos legales, tales como las leyes de transparencia, fiscalización, electorales o de rendición de cuentas existentes en nuestro país.

Es indiscutible señalar que en nuestro sistema mexicano contemporáneo, ha acarreado múltiples inconformidades dentro de la parcialidad, legalidad y transparencia en la función pública, es por ello y dentro de estos compromisos y necesidades sociales se ha aventurado en implementar un “gobierno abierto” para consolidar el dialogo entre gobernados y gobernantes, entendido este último a todas las divisiones de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y autoridades competentes (judiciales, administrativas, fiscales, descentralizadas y organismos públicos autónomos).

**¿Ha identificado como un problema existente en su país o en la región el uso indebido del derecho penal con el fin de criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos por su actividad? De ser así, indique en qué contextos ocurriría, qué actores intervienen, y cuáles serían las causas principales o los factores que la generan.**

De acuerdo al multicitado informe del Relator especial de la ONU para las defensoras y los defensores de derechos humanos, las diversas violaciones de derechos humanos dirigidas a este sector de la población se realizan a través del mal uso deliberado del derecho penal y su manipulación, la cual se ejerce desde el poder que ejerce el Estado hasta aquellos entes no estatales (ONU, 2017).

Por lo que ese actuar, en ocasiones precedido por manifestaciones despectivas realizadas por funcionarios públicos, en las cuales las defensoras y los defensores son difamados y acusados de perpetrar delitos u obstaculizar la seguridad nacional, han inducido el comienzo de procesos jurisdiccionales dilatados; por otro lado, se han utilizado los arrestos y detenciones arbitrarios como un instrumento para silenciar y aquietar los movimientos sociales.

En donde la mayoría de los casos, se criminaliza a las defensoras y los defensores por denunciar violaciones perpetradas por parte de las autoridades públicas, enfrentando represalias indirectas a través de sus familias o personas cercanas a ellos.

Lo anterior, se sabe que puede provocar un efecto inhibidor no sólo en ellos, sino de manera indirecta en la sociedad en general, dado que disminuyen los movimientos sociales siendo una de las principales causas para que la población presente denuncias por crímenes graves, traduciéndose en que las defensoras y los defensores tienen que dedicar mayor cantidad de tiempo y recursos para defenderse mermando así su capacidad de proteger a las personas más vulnerables en la sociedad.

Es así que podemos enfatizar un contexto donde el sistema penal mexicano, por ejemplo, es caracterizado por el mecanismo de la llamada “puerta giratoria”, los defensores de derechos humanos que abogan por el respeto al debido proceso y que buscan evitar violaciones hacia aquellos detenidos que pertenecen a grupos vulnerables, se enfrentan con la reticencia y el escepticismo. Un descrédito que también puede verse alimentado por la representación mediática de este asunto. En ello intervienen los criterios establecidos por los ministerios públicos para sancionar o liberar, así como los articuladores de políticas públicas en materia de seguridad; estos últimos determinan prioridades y estrategias en el combate a la inseguridad, pero no necesariamente ejercen un control sobre los criterios mencionados arriba.

**Si es el caso, ¿Bajo qué delitos se alega acusaciones infundadas a defensoras y defensores? De ser posible, proporcione ejemplos.**

En la mayor parte de los casos, la criminalización a las personas defensoras de derechos humanos se constituye mediante denuncias o querellas basadas en delitos, los cuales no se encuentran fundadas de conformidad al principio de legalidad, ni cumplen con las normas internacionales de derechos humanos (ONU, 2017).

Dentro de los cuales se rescata la ambigüedad de delitos como aquellos que hacen alusión a ataques contra la paz pública, delitos contra la propiedad privada, delitos contra la imagen pública, etc.

Algunos otros delitos identificados son: i) sabotaje, ii) rebelión, iii) asociación ilícita, iv) intimidación, v) apología del delito, vi) secuestro, vii) plagio y viii) perturbación del orden público (Protección internacional, 2015).

* **Acceso a justicia y reparación:**

**¿Podría aportar información sobre el estado de investigaciones de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos?**

Además de los delitos y agresiones anteriormente señaladas, la Protección Internacional (2015), elaboró un informe denominado “*Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos*” en el cual se destaca la siguiente información valiosa para el tema:

En 2014 la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR por sus siglas en inglés) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), publicó las Directrices sobre la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos (en adelante Directrices OSCE/ODIHR). Estas directrices “no establecen nuevos estándares o pretenden crear derechos ‘especiales’ para las y los DDH”. Por el contrario, tienen como objetivo apoyar a los Estados participantes en la implementación de los compromisos con la protección de las y los DDH. Las Directrices OSCE/ODIHR contienen previsiones sobre la criminalización de DDH, principalmente en el apartado “Protección contra el acoso judicial, criminalización, arresto y detención arbitraria” en el que diferencian la criminalización de lo que entienden como fenómenos afines a ella y exponen que las personas DDH:

[…] no deben ser sometidas a acoso judicial por procedimientos jurídicos o administrativos injustificados o por cualquier otra forma de abuso de autoridades administrativas y judiciales. Ni a detenciones y encarcelamientos arbitrarios, así como a otras sanciones para actos relacionados con su trabajo […]” (Protección Internacional, 2015, p. 18).

**¿Qué medidas ha tomado el Estado para garantizar una reparación adecuada y garantías de no repetición? Haga referencia a ejemplos concretos**.

En este aspecto debemos de señalar que, en México a partir de estos compromisos internacionales, armoniza su legislación interna a favor de los derechos humanos de las víctimas desde 2008, y hasta la fecha ha enfrentado una vorágine de cambios sociales, políticos y sobre todo jurídico-constitucionales. En este trabajo nos concentraremos en dos altamente relevantes: por un lado, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del 18 de junio de 2008 y la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Siendo esto la introducción y fortalecimiento del nuevo andamiaje del sistema de justicia penal en el país, cubriendo en ello, una deuda histórica hacia las víctimas, en donde se restableció la participación de las víctimas en las actuaciones jurisdiccionales. Por lo cual, estas reformas tuvieron como principales frutos o resultados, por un lado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya entrada en vigor en todas las entidades federativas se concertó el 18 de junio de 2016, incluyendo un nuevo sujeto procesal denominado asesor jurídico de víctimas.

En este razonamiento no debemos olvidar que nuestra Carta Magna, en su artículo 1° establece, en el tercer párrafo: que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Por lo que se introdujeron leyes especiales que unificaron criterios para el reconocimiento y aplicación de los derechos de las víctimas, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 9 de enero de 2013, y reformada mediante decreto publicado el 3 de mayo del mismo año, estableciendo en su artículo 79 la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que para su operación y cumplimiento de sus atribuciones contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual quedó debidamente constituida por decreto presidencial publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 8 de enero de 2014.

Es así que la Ley General de Víctimas reconoce en su artículo segundo a dos tipos de víctimas:

* Víctimas del delito.
* Víctimas de violaciones de derechos humanos.

De ambos tipos derivan las diversas clasificaciones que conducen a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos:

* Víctimas directas: aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
* Víctimas indirectas: los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
* Víctimas potenciales: las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
* Víctimas colectivas: los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Lo anterior es básico para reconocer y garantizar el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la ley.

En relación con la reparación integral, se advierte que en la Ley General de Víctimas para remediar los daños causados debe ser adecuada, efectiva y rápida. Contiene además medidas de ayuda inmediata y humanitaria en materia de salud, alojamiento, alimentación y transporte, y además, reconoce medidas de protección que podrá proporcionar cualquier autoridad nacional o internacional, las cuales deberán regirse por los principios de necesidad, proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia. La ley reconoce también medidas de educación, económicas y de desarrollo, para que las víctimas reciban apoyo en diversas materias sociales, de educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y de seguridad social. En materia de procuración y administración de justicia, reconoce el derecho a elegir libremente a su representante legal frente a procedimientos penales, así como a solicitar asesoría jurídica gratuita y permanente en caso de no contar con los medios para designarla.

Se formulan los siguientes tipos de reparaciones del daño:

* Restitución;
* Rehabilitación;
* Compensación;
* Satisfacción;
* Las medidas de no repetición;
* Reparaciones colectivas.

Por ello, la compensación se establece que será en los términos y montos que la sentencia firme de un órgano jurisdiccional competente determine, y en los casos en que no hubiera sentencia, se consigna la responsabilidad patrimonial del Estado como subsidiaria.

* **Acciones preventivas y reactivas a las agresiones contra defensoras/es:**

**¿Qué medidas, normas, leyes, políticas y mecanismos han incidido positiva o negativamente en generar contextos seguros para defensoras/es de derechos humanos? ¿Conoce casos que puedan ejemplificar lo indicado?**

Para este contexto la organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado, ha señalado que la mejor forma de proteger a las personas defensoras de derechos humanos es la lucha contra la impunidad (ONU México, 2017).

Por lo que en México a partir del 25 de junio de 2012, y tras una política nacional que se articuló a través de la observancia de diversas evaluaciones, se incorporó la citada Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual, así como se refiere con antelación, conforma parte de las políticas y mecanismos que buscan evidenciar el avance positivo a los contextos de protección de las y los defensores de derechos humanos; en donde se tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las medidas preventivas y urgentes de defensa y protección que aseguren la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas como resultado de la defensa de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Además, y en ejercicio a esta actividad debemos de advertir que una de las medias que han apoyado a las personas defensoras de derechos humanos, es el reconocimiento del derecho a la privacidad y la protección de datos personales, no obstante, es bastante común el espionaje gubernamental en la región e incluso del gobierno federal, tal fue lo sucedido en el caso “pegasus” en México. Donde el gobierno federal adquirió una tecnología que le permitiría espiar y monitorear a defensoras y defensores de derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México (en delante SCJN) ha dicho que lo privado, es lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.

En nuestro derecho interno la privacidad se encuentra reconocido en el artículo 6° constitucional como un límite al derecho a la información; además, el citado derecho se halla registrado en otras declaraciones y convenciones que también forman parte del orden jurídico mexicano, de conformidad con el artículo 1 y 133 constitucionales, en relación con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; como la DUDH de 1948 (artículo 12), el PIDCP de 1966 (artículo 17), la CADH de 1969 (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (artículo 16).

Los citadas instrumentos legales, interpretados por la SCJN, ha destacado la vinculación de la privacidad con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relaciones con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud, y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados.

Con fundamento a lo anteriormente narrado, la SCJN sostiene que las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de protección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad –para el desarrollo de su autonomía y libertad–. La misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia que los demás no las invadan sin su consentimiento.

Por lo tanto, la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno, protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y guardar conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.

El desarrollo histórico de la protección de datos personales en México comenzó en 2009, cuando se elevó a rango constitucional el citado derecho en el artículo 6°, A., fracción II y el 16, segundo párrafo; en el año 2010 se promulgó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y en 2011 su Reglamento; finalmente en 2017 se aprobó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, e inmediatamente después surgieron las leyes de las Entidades Federativas.

Ahora bien, las leyes secundarias reconocen y dan conceptos básicos de qué se debe entender por determinadas figuras jurídicas, tal es el caso de los datos personales, donde los definen como “*cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información*[[20]](#footnote-20)”, datos personales sensibles como *“aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, datos biométricos, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual*[[21]](#footnote-21)”. Vale la pena hacer énfasis en que el presente caso, se centra en datos personales sensibles, toda vez que al reverlos podrían poner en peligro a los periodistas o defensores de derechos humanos.

Sin embargo, la ley no se ha enfocado a dar un concepto uniforme a qué se debe entender como “derecho a la protección de datos personales”. Afortunadamente, quienes se han encargado de construir un concepto claro y preciso es la SCJN, esto en su labor de interpretar la ley, así como la doctrina.

La SCJN sostiene que el derecho a la protección de datos personales es:

*“(…) el derecho a poseer la intimidad a efecto de disponer del control sobre la publicidad de la información tanto de la persona como de su familia; lo que se traduce en el derecho de la autodeterminación de la información que supone la posibilidad de elegir qué información de la esfera privada de la persona puede ser conocida o cuál debe permanecer en secreto, así como designar quién y bajo qué condiciones puede utilizar esa información. En este contexto, el derecho a la intimidad impone a los poderes públicos, como a los particulares, diversas obligaciones, a saber: no difundir información de carácter personal entre los que se encuentran los datos personales, confidenciales, el secreto bancario e industrial y en general en no entrometerse en la vida privada de las personas; asimismo, el Estado a través de sus órganos debe adoptar todas las medidas tendentes a hacer efectiva la protección de este derecho”[[22]](#footnote-22).*

Para reforzar lo anterior, Martínez (2007, p. 51) define el derecho a la protección de datos personales como aquel que “*garantiza la facultad del individuo de decidir básicamente por sí mismo sobre la difusión y la utilización de sus datos personales*”.

En la actualidad, es sabido que, el derecho a la información se encuentra ligado con el derecho a la protección de datos personales. Sin embargo, los choques a los que se enfrentan estos derechos fundamentales, ha creado una serie de movimientos ideológicos con la intención de delimitar los espacios de público y privado.

En esa sintonía Gregorio (2004, p. 303), de su obra titulada “Protección de Datos Personales: Europa vs Estados Unidos, todo un dilema para América Latina”. El autor define de manera clara los conceptos de público y privado, limitando al primero como la necesidad de dejar determinado documento accesible al público con la finalidad del control ciudadano de los actos de gobierno; el último es más preciso, al decir que es toda decisión personal en la que el Estado no puede intervenir.

En relación con lo anteriormente narrado, surge la necesidad de establecer la relación y la plena autonomía de los citados derechos, es decir, de la protección de datos personales, frente al derecho de acceso a la información pública.

A fin de dar respuesta a la problematización Escalante (2004, p. 186), afirma que la estructura constitucional depende de la existencia de dos ámbitos claramente distintos, uno privado y otro público, que no se explican ni justifican, salvo donde hay excepciones. El límite que se refiere a la privacidad, se justifica debido a la dignidad humana que implica el poder elegir en libertad; dicho de otra manera, se trata de elegir el propio plan de vida.

Importante resulta destacar las aportaciones que realiza Garzón (1998, p. 227), en su estudio Privacidad y Publicidad, la privacidad es el ámbito donde imperan exclusivamente los deseos y preferencias individuales. Es condición necesaria del ejercicio de la libertad individual. Por otro lado, advierte que lo público está caracterizado por la libre accesibilidad de los comportamientos y decisiones de las personas en sociedad.

Así pues, tenemos que, si lo íntimo está caracterizado por su total opacidad, lo que caracteriza a lo público es la transparencia (Garzón, 1998, p. 226).

Asimismo, Martínez (2007, p. 55) advierte que, para que el derecho a la protección de datos personales ceda frente al derecho de acceso a la información, es importante tomar en consideración que la información sea relevante o de interés público y, por tanto, contribuya al debate público o a la formación de una opinión pública libre – que no es el caso–. También será relevante cuando la persona objeto de la noticia posea un carácter público y la noticia ilustre sobre algún aspecto relevante de ese perfil.

Por otro lado, uno de los países pioneros en el tema de privacidad y protección de datos personales, es Estados Unidos, quien tomó como primer elemento la libertad a la esfera íntima, luego por extensión la jurisprudencia fue reconociendo otros derechos como en los casos de Mayer vs. Nebraska y las leyes que prohibían la enseñanza antes del noveno grado de otra lengua que no fuera el inglés; más tarde a través de otros casos relevantes en materia de sexualidad, como la prohibición de anticonceptivos, esterilizaciones a criminales, así como el de la creación de un registro computarizado y centralizado para mantener bases de datos de pacientes y sus enfermedades que permitían identificar al paciente (Gregorio, 2004, p. 304).

En otro orden de ideas, Alemania fue una de las primeras en reconocer la autodeterminación informativa, traducido en el derecho a controlar la información de sí mismo y la capacidad de determinar si esa información puede ser recogida y de cómo debe hacerse (Martínez, 2007, p. 48).

En la misma línea argumentativa, Cuervo (2014)[[23]](#footnote-23) en su obra “Autodeterminación informativa” advierte que, de la resolución del Tribunal Constitucional de Alemania, éste reconoce el derecho a la autodeterminación informativa como un derecho derivado de la personalidad.

La citada sentencia, tiene su antecedente con el grupo de “los verdes” y la Ley de Censo, donde primeramente se obtuvo una suspensión provincial en tanto se resolvía el fondo del asunto: en el cual se reconoce este nuevo derecho, pero al mismo tiempo también le impone límites en el marco del interés general y bajo un supuesto establecido en la constitución (Martínez, 2007, pp. 48 a 51).

De igual forma, y sobre este sentido habrá de rescatarse la resolución 53/144 de la Asamblea General de la ONU. “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (1999).

**Incluya una evaluación sobre los mecanismos nacionales de protección a defensoras/es, si el país en el que se enfoca cuenta con estos mecanismos. ¿Cuál ha sido su alcance real y eficacia? Por favor, señale las razones para dicha valoración.**

Valorar los mecanismos nacionales de protección para las defensoras y defensores de derechos humanos tiene una dualidad de índole teórica y práctica. Por un lado, existe un marco normativo encabezado por la Carta Magna del País y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que velan por la dignidad de todas las personas por igual. De manera específica se ubican mecanismos como lo son: i) La declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, ii) Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Asimismo, actualmente existe el llamado “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” del Gobierno del Estado Mexicano, el cual, busca trabajar en contra de los actos tendientes al desprestigio, estigmatización o descalificación de las acciones realizadas en contra de personas y organizaciones que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos en México.

Además, tal y como se manifestaba con antelación, existen los medios adecuados para que México, como uno de los países con mayor garantía legislativa en materia de derechos humanos, pueda realizar las tareas de prevención e investigación oportuna a cualquier acto de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos y para que éstos puedan ejercer sus derechos; pero esto no se gestará de manera adecuada en tanto las prácticas no vayan en concordancia con el principio de legalidad a esa normativa, otro de los cánceres a combatir es la impunidad y la corrupción, así como crear campañas de promoción de los derechos humanos, para que la gente tenga conocimiento de su alcance. Por otro lado, y no menos importante, tiene que existir una conjunción entre la teoría y la práctica para garantizar el pleno goce de la profesión de las personas que desempeñan desde la sociedad civil organizada o desde los colectivos de grupos en situación de vulnerabilidad, la defensa por los derechos humanos.

**IV. BIBLIOGRAFÍA:**

**LIBROS Y ARTÍCULOS ACADÉMICOS**

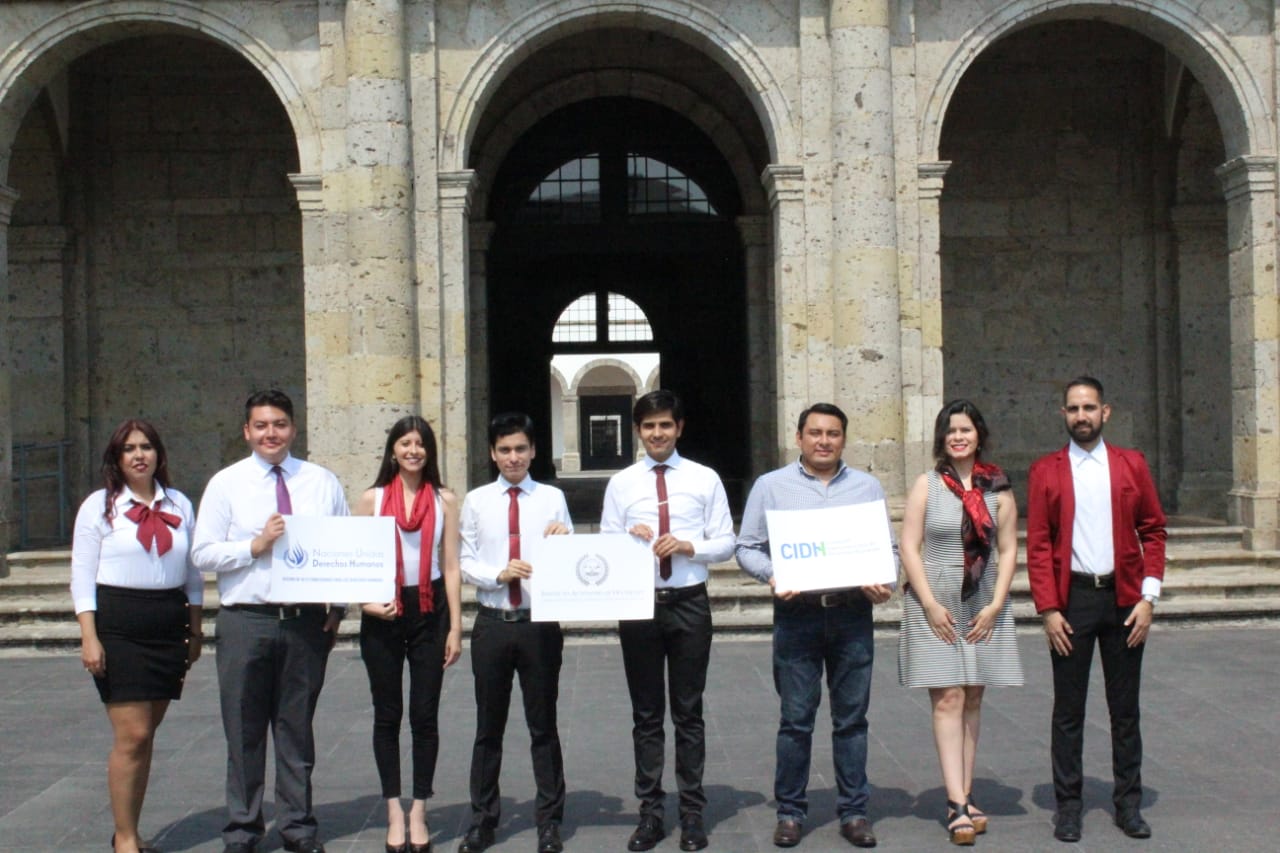
* ACKERMAN, J. Y SANDOVAL, I. (2015). *Leyes de Acceso a la Información en el Mund*o. Cuadernos de Transparencia. Vol. 07. México: INAI.
* AGUILAR J. (2008). *Transparencia y democracia: claves para un concierto*. En: Cuadernos de Transparencia Vol. 10. México: INAI.
* ALBERCH, R. (2008). *Archivos y derechos Humanos*. España: TREA.
* ARAUJO, E. (2009). *El derecho a la Información y a la protección de datos personales en México.* México: Porrúa.
* CANTORAL, K. (2012). *Derecho de protección de datos personales de la salud*. México: Novum.
* CENDEJAS, M. (2007). *Evolución histórica del derecho a la información*. Revista de Derecho Comparado de la Información,número 10, Julio – diciembre 2007. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
* CENDEJAS, M. (2010). *Derecho a la Información. Delimitación conceptual.* En derecho comparado de la información. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
* CRESPO, J. (2001*). Fundamentos políticos de la rendición de cuentas, en Cultura de la Rendición de Cuentas*, núm. 1. México: Cámara de Diputados-Auditoría Superior de la Federación.
* CRUZ, O. (2011). *Antecedentes Jurídicos de la Transparencia en México*. *Revista de Derecho Comparado de la Información,* número 17, Enero – junio 2011. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
* DE LA PARRA, E. (2014). *El derecho a la propia imagen*. México: Tiran lo Blanch.
* DE LA PARRA, E. (2015). *Libertad de expresión y acceso a la información*. Colección de textos sobre derechos humanos. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
* FLORES, M. (2009). *Diccionario de Derechos Humanos.*  México: FLACSO.
* GARCÍA, P. (2014). *Derechos y libertades, internet y tics.* Valencia: Tirant lo Blanch.
* GARZÓN, V. (2008). *Lo íntimo, lo privado y lo público.*Cuadernos de transparencia, número 6, Quinta Edición. México: INAI, 2008.
* GARZÓN, V. (1998). *Privacidad y publicidad*, Revista Doxa, número 21, Cuadernos de filosofía del Derecho, Centro de Estudios políticos y Constitucionales, Alicante, España, pp. 223-244.
* GÓMEZ, A. (2007). *Definiciones básicas sobre la transparencia y el acceso a la información pública*. En: Acceso a la Información: Un derecho de avanzada en Jalisco. México: ITEI.
* GÓMEZ, P. (2012). *Derecho a la información, reflexiones contemporáneas*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
* GREGORIO, C. (2004). *Protección de Datos Personales: Europa vs. Estados Unidos, todo un dilema para América Latina.* Transparentar al Estado: la experiencia mexicana de acceso a la información. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
* HERNÁNDEZ, M. Y ALVAREZ J. (2015). *La transparencia y el derecho de acceso a la información en México.* México: Tirant lo Blanch.
* INSTITUTO DE TRASPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (2007). *Acceso a la Información: Un derecho de avanzada en Jalisco*. México: ITEI-ITESO.
* JIMÉNEZ, J. (1999). *Derechos Fundamentales: Concepto y Garantías*. España: Trotta.
* KUBLI-GARCÍA F. (2010). *El Principio de máxima publicidad.* En: Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa, 2 Ejemplares, Coedición con: UNAM, Facultad de Derecho, 2010. México: UNAM.
* LATHROP, D. Y RUMA, L. (2010). *Open Government: Collaboration, Transparency and Participation in practice*. Sebastopol: O'Really Media.
* MENDEL, T. (2008). *Libertad de Información: Comparación Jurídica*. Segunda Edición. París: Unesco.
* MURILLO, P. Y PIÑAR, J. (2011). *El derecho a la autodeterminación informativa*. México: Fontomara.
* PAHUAMBA, B. (2016). *El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y el uso debido de los recursos públicos*. México: Express.
* PERELLO, I. (s.f.). *El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia constitucional.* Madrid: Asociación Pro Derechos Humanos de España.
* RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (2006), *El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico americano.* Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
* RODRÍGUEZ, J. (2008). *Estado y Transparencia: un paseo por la filosofía política.* Cuadernos de transparencia, número 4, Quinta Edición. México: IFAI.
* SALAZAR, P. Y VÁSQUEZ, P. (2008). *La reforma al artículo 6o. De la Constitución mexicana: contexto normativo y alcance interpretativo*. En Salazar Ugarte, Pedro, Coordinador, *El Derecho de Acceso a la Información en la Constitución Mexicana: razones, significados y consecuencias.* México:Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
* TRONCOSO, A. (2010). *La protección de datos personales. En busca del equilibrio. España:* Tirant lo Blanch.
* UGALDE, L. (2001). *La Rendición de Cuentas en los Gobiernos Estatales y Municipales.* Serie Cultura de la Rendición de Cuentas. México: Auditoría Superior de la Federación.
* VILLANUEVA, E. (2006). *Derecho de la información*. México: Miguel Ángel Porrúa-Universidad de Guadalajara.
* VILLANUEVA, E. (2009). *Diccionario de Derecho a la información*. México: Porrúa.
* VUELVAS, M. (2015). *Letras libres vs. La Jornada: la libertad de expresión ante los tribunales.* México: Universidad de Colima.

**LEGISLACIÓN:**

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917.
* Organización de las Naciones Unidas, Noticas México (2018). Recuperado de <http://www.onunoticias.mx/criminalizacion-los-defensores-derechos-humanos-ha-convertido-mexico-uno-los-paises-mas-peligrosos-del-mundo-alerta-experto-la-onu/>
* Organización de las Naciones Unidas (2017). *Informe del Final de la Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los defensores de Derechos Humanos.* Recuperado de <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21111&LangID=S>
* Protección internacional (2015). *Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos*. Recuperado de <https://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2016/01/PI_Criminalisation_Spanish_PrintReady1.pdf>
* Organización de las Naciones Unidas (2017). *Defensores de DD HH: “La mejor forma de protegerlos es luchando contra la impunidad”*. Recuperado de <https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21117&LangID=S>

**V. REQUISITOS Y CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO:**

Conforme a las exigencias procedimentales aplicables, acreditamos la elaboración del presente documento a nombre del Instituto Autónomo de Occidente (IAO):



**Guadalajara, Jalisco, México a 9 de junio de 2019.**

Mtro. José Benjamín González Mauricio

Mtro. Rafael Ríos Nuño

Lic. Alejandra Isabel Plascencia López

Lic. Martha María Guadalupe Orozco Reyes

Lic. Judith Ponce Ruelas

Mtro. Hermilo de Jesús Lares Contreras

Lic. Saúl Oswaldo Regla Dávila

Lic. Cristian Jonathan Vargas Díaz

1. Risco Antonio. Miguel Reale, *Teoria tridimensional del derecho. Preliminares históricos y sistemáticos.* Traducción de Juan Antonio Sardina-Páramo. In: Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°25, 1975. pp. 215-218. [↑](#footnote-ref-1)
2. Savigny, Friedrich Karl Von, *Metodología Jurídica*, traducción de J.J. Santa-Pinter, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1994, pp. 12-13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dueñas Ruiz, Óscar José, *Lecciones de Hermenéutica Jurídica*, 6ta Edición, Colombia, Editorial Universidad del Rosario, 2011, p. 130. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pérez Johnston, Raúl, *Derechos Humanos y Justicia,* Memorias del seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, 2012, [*http://www.sitios.scjn.gob.mx/instituto/sites/default/files/documentos/LIBRO%20SEMINARIO%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf*](http://www.sitios.scjn.gob.mx/instituto/sites/default/files/documentos/LIBRO%20SEMINARIO%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf)*.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Consejo Económico y Social, Promoción y Protección de los Defensores de Derechos Humanos: Defensores de los Derechos Humanos. Informe presentando por la señora Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de derechos humanos de conformidad con la resolución 2000/61 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.20010/94, 26 de enero de 2001, párr.2 [↑](#footnote-ref-5)
6. artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” [↑](#footnote-ref-6)
7. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 96. [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte I.D.H., Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 145. [↑](#footnote-ref-8)
9. Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283. [↑](#footnote-ref-9)
10. Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283. [↑](#footnote-ref-10)
11. Organización de las Naciones Unidas, *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*, adoptada en la resolución 70/1 de la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015. Disponible en: www.un.org/sustainabledevelopment/es [↑](#footnote-ref-11)
12. México, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, capítulo primero: Política y Gobierno, pág. 14-33. Disponible: https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf [↑](#footnote-ref-12)
13. Consultar las siguientes fuentes de información: [*https://www.proceso.com.mx/501087/en-ano-se-registraron-mil-442-agresiones-contra-defensores-derechos-humanos-en-mexico-comite-cerezo*](https://www.proceso.com.mx/501087/en-ano-se-registraron-mil-442-agresiones-contra-defensores-derechos-humanos-en-mexico-comite-cerezo) y [*https://www.animalpolitico.com/2017/12/defensores-derechos-humanos-asesinatos/*](https://www.animalpolitico.com/2017/12/defensores-derechos-humanos-asesinatos/)*.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Informe de la CIDH sobre “Criminalización de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos”, 31 diciembre 2015, pág. 11. [↑](#footnote-ref-14)
15. Congreso del Estado de Jalisco, (2013). Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. [En línea]. Consultado el 04 de junio de 2019. Disponible en: [*http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20del%20Estado%20de%20Jalisco%20y%20sus%20Municipios.doc*](http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20del%20Estado%20de%20Jalisco%20y%20sus%20Municipios.doc) [↑](#footnote-ref-15)
16. Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, (2016). Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México. [En línea]. Consultado el 04 de junio de 2019. Disponible en: [*http://www.aldf.gob.mx/archivo-cf208a5520aee873ce03cf707c7982d0.pdf*](http://www.aldf.gob.mx/archivo-cf208a5520aee873ce03cf707c7982d0.pdf) [↑](#footnote-ref-16)
17. Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, (2015). Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. [En línea]. Consultado el 04 de junio de 2019. Disponible en: [*http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf*](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf) [↑](#footnote-ref-17)
18. Toda aquella persona física o jurídica, de derecho público o privado, que reciba o ejerza recursos públicos, actos de autoridad o actos equiparables a los de autoridad. [↑](#footnote-ref-18)
19. Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, (2016). [En línea]. Consultado el 04 de junio de 2019. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf [↑](#footnote-ref-19)
20. Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus Municipios. [↑](#footnote-ref-20)
21. Artículo 3, fracción X de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus Municipios. [↑](#footnote-ref-21)
22. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: I.3o.C.695 C. Amparo en revisión 73/2008. 6 de Mayo de 2008. [En línea]. Consultado el 04 de junio de 2019. Disponible en: *https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=autodeterminaci%25C3%25B3n%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA\_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=78&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=168944&Hit=40&IDs=2006241,2006057,2005118,2003465,2002353,2002257,2002011,2001635,2001735,160032,2000097,161265,162440,163655,164605,165821,166504,166470,168359,168944&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=* [↑](#footnote-ref-22)
23. Cuervo, J. Autodeterminación informativa. [En línea] Consultado el 10 de enero de 2019 en: http://www.informatica-juridica.com/trabajos/autodeterminacion\_informativa.asp#1.4.2. [↑](#footnote-ref-23)